



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

29^a REUNION – 26ª SESION ORDINARIA
29 DE NOVIEMBRE DE 2006

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor JOSE J. B. PAMPURO, del señor vicepresidente del Honorable Senado,
doctor MARCELO E. LOPEZ ARIAS, de la señora vicepresidenta 1ª del Honorable
Senado, licenciada MIRIAN B. CURLETTI y del señor vicepresidente 2º
del Honorable Senado, doctor RICARDO GOMEZ DIEZ

Secretarios:

Señor JUAN H. ESTRADA y señor CARLOS A. MACHIAROLI

Prosecretarios:

Señor JUAN J. CANALS, señor NESTOR H. RIGHETTI y señor RICARDO N. GUTIERREZ



PRESENTES:

BAR, Graciela Y.
 BASUALDO, Ricardo G.
 BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana R.
 BUSSI, Ricardo Argentino
 CAPITANICH, Jorge M.
 CAPOS, Liliana
 CASTILLO, Oscar A.
 CASTRO, María Elisa
 CLOSS, Maurice F.
 COLOMBO, María T.
 CURLETTI, Mirian B.
 DANIELE, Mario D.
 ESCUDERO, Sonia M.
 FALCÓ, Luis
 FELLNER, Liliana B.
 FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
 FERNÁNDEZ, Nicolás A.
 GALLEGGO, Silvia E.
 GIOJA, César A.
 GIRI, Haide D.
 GIUSTI, Silvia Ester
 GIUSTINIANI, Rubén H.
 GÓMEZ DIEZ, Ricardo
 GONZÁLEZ DE DUHALDE, Hilda
 GUINLE, Marcelo A. H.
 ISIDORI, Amanda Mercedes
 JAQUE, Celso Alejandro
 JENEFES, Guillermo Raúl
 LATORRE, Roxana Itatí
 LEGUIZAMÓN, María L.
 LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
 MARÍN, Rubén H.
 MARINO, Juan C.
 MARTÍNEZ, Alfredo A.
 MARTÍNEZ PASS DE CRESTO, Laura
 MASSONI, Norberto
 MASTANDREA, Alicia E.
 MAYANS, Miguel Angel

MAZA, Ada M.
 MENEM, Carlos S.
 MERA, Mario Rubén
 MIRANDA, Julio A.
 MORALES, Gerardo Rubén
 NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
 PAMPURO, José J. B.
 PERCEVAL, María C.
 PÉRSICO, Daniel Raúl
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis. C.
 PICHETTO, Miguel Á.
 PINCHETTI DE SIERRA MORALES, Delia N.
 REUTEMANN, Carlos Alberto
 RIOFRIO, Marina R.
 RODRIGUEZ SAÁ, Adolfo
 ROSSI, Carlos Alberto
 SAADI, Ramón Eduardo
 SÁNCHEZ, María D.
 SANZ, Ernesto R.
 SAPAG, Luz M.
 TAFFAREL, Ricardo C.
 TERRAGNO, Rodolfo
 URQUÍA, Roberto Daniel
 VIGO, Élica M.
 VIUDES, Isabel J.
 KIRCHNER, Alicia M. A.

AUSENTES CON AVISO:

CAPARRÓS, Mabel Luisa
 GALLIA, Sergio Adrián
 IBARRA, Vilma Lidia
 QUINTELA, Teresita N.
 RÍOS, Roberto Fabián
 SALVATORI, Pedro
 VIANA, Luis A.
 ZAVALÍA, José L.

SUMARIO

1. **Izamiento de la bandera nacional.** (Pág. 4.)
2. **Facultad a la Presidencia para pasar a cuarto intermedio.** (Pág. 4.)
3. **Cuestión de privilegio.** (Pág. 4.)
4. **Precio diferencial para gas en garrafa. Moción de preferencia.** (Pág. 6.)
5. **Plan de labor parlamentaria.** (Pág. 6.)
6. **Asuntos entrados.** (Pág. 7.)
7. **Acuerdos.** (Pág. 7.)

Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero. (Pág. 8.)

Fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía N° 3. (Pág. 8.)

Fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía N° 4. (Pág. 8.)

Fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía N° 24. (Pág. 8.)

Fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía N° 25. (Pág. 8.)

Fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía N° 41. (Pág. 8.)

Fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía del distrito del barrio de La Boca. (Pág. 9.)

Fiscal general ante los tribunales orales en lo penal económico, Fiscalía N° 4. (Pág. 9.)

Fiscal general ante los tribunales orales en lo penal económico, Fiscalía N° 1. (Pág. 9.)

Defensor público oficial ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal de instrucción y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 9. (Pág. 9.)

Defensora pública oficial ante el juzgado federal de primera instancia en lo criminal y correccional de Tres de Febrero. (Pág. 9.)

Fiscal ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal, Fiscalía N° 6. (Pág. 10.)

Fiscal ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal, Fiscalía N° 5. (Pág. 10.)

8. Consideración en conjunto de órdenes del día. (Pág. 10.)

O.D. 1.156 Alcance de la cláusula 123 del compromiso federal ratificado por ley 25.235 en deudas de cajas previsionales provinciales respecto de petición realizada por jubilados. (Pág. 10.)

O.D. 1.189 Declaración de interés parlamentario las I Jornadas de Instituciones Dedicadas al Desarrollo Regional. (Pág. 10.)

O.D. 1.190 Declaración de interés del Honorable Senado del libro *José María Guido. Un patriota en la borrasca*. (Pág. 10.)

O.D. 1.192 Beneplácito por el logro del escritor Enrique Manuel Abondio Butti. (Pág. 10.)

O.D. 1.193 Declaración de interés legislativo de "Innovar 2006", II Concurso Nacional de Innovaciones. (Pág. 10.)

O.D. 1.194 Satisfacción por la distinción otorgada al científico argentino Walter Torbay. (Pág. 10.)

O.D. 1.195 Beneplácito por los logros obtenidos por científicos argentinos referidos a la recuperación de petróleo residual. (Pág. 10.)

O.D. 1.196 Declaración de interés parlamentario y cultural del libro *Azampay, presente y pasado de un pueblito catamarqueño*. (Pág. 10.)

O.D. 1.197 47° aniversario de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional. (Pág. 11.)

O.D. 1.198 Declaración de interés cultural de los premios a la cultura "Arturo Jauretche". (Pág. 11.)

O.D. 1.199 Declaración de interés cultural del Museo Histórico Regional de Choelechoel, Río Negro. (Pág. 11.)

O.D. 1.200 Declaración de interés del XXII Congreso Interamericano de Ingeniería Química y del V Congreso Argentino de Ingeniería Química. (Pág. 11.)

O.D. 1.201 Declaración de interés cultural de la Sala de Exposiciones "Lola Mora". (Pág. 11.)

9. O.D. 1.244 Modificación del presupuesto ejercicio 2006. (Pág. 11.)

10. Modificación del plan de labor. (Pág. 31.)

11. C.D. 132/06: Prórroga de suspensión de exención del impuesto a las ganancias - C.D. 133/06: Exclusión de conceptos de la Convención Colectiva de Trabajo de Explotación Petrolera - C.D. 136/06: Creación del Fondo Hídrico de Infraestructura Específica - C.D. 129/06: Modificación de la ley 25.798 (Regímenes de financiación hipotecaria, sobre creación de una unidad de reestructuración, de mutuos hipotecarios. Preconvertibilidad - C.D. 112/06: Prórroga del vencimiento de la ley para acogerse a los beneficios contemplados por distintas leyes, indemnización para víctimas de delitos de lesa humanidad, centros de tratamiento infantil. (Pág. 32.)

12. O.D. 1.146: Modificación de la ley 24.464, de Sistema Federal de la Vivienda. (Pág. 74.)

13. O.D. 1.054: Accesibilidad a medios de comunicación audiovisual para personas afectadas por algún tipo de dificultad auditiva. (Pág. 75.)

14. O.D. 1.076: Condonación de deuda de la Asociación de Protección al Paralítico Cerebral de Jujuy con la AFIP. (Pág. 75.)

15. S.-4.218/06: Régimen de acceso a materiales protegidos por derechos de autor para personas con discapacidad. (Pág. 75.)

16. O.D. 1.203/S.-1.970/06: Creación de Centros de Desarrollo Infantil. (Pág. 76.)

17. Decretos de necesidad y urgencia (O.D. 1.170 y anexos, O.D. 1.171 y anexos, O.D. 1.172 y anexos, O.D. 1.212 y anexos, O.D. 1.213 y anexos, O.D. 1.254 y anexos y O.D. 1.255 y anexos, con dictamen de comisión) - Prórroga de la emergencia pública (O.D. 1.214). (Pág. 76.)

18. Prórroga de la emergencia pública. (Pág. 111.)

19. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas. (Pág. 111.)

S.-4.327/06 Aniversario del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. (Pág. 112.)

S.-4.348/06 Nuevo Aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos. (Pág. 112.)

S.-4.363/06 Adhesión a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemora el 10 de diciembre. (Pág. 112.)

S.-4.136/06 Premio obtenido por la película argentina *Olga, Victoria Olga*. (Pág. 112.)

S.-4.235/06 Segundo Festival Internacional de Tango en Justo Daract, San Luis. (Pág. 112.)

S.-4.141/06 Beneplácito por proyecto de investigación arqueológica y antropológica del Conicet en Salta. (Pág. 112.)

S.-4.144/06 Programa “Para mí también”, de educación sexual para la comunidad sorda y personas con capacidades diferentes. (Pág. 112.)

S.-3.986/06 Medidas para solucionar el conflicto entre la Secretaría de Transporte de la Nación y la empresa chilena Ferromonte. (Pág. 112.)

S.-4.028/06 Adhesión a la conmemoración del 105º aniversario de Huinca Renancó, Córdoba. (Pág. 112.)

20. **Apéndice:**

I. **Asuntos entrados.** (Pág. 113.)

II. **Votaciones nominales.** (Pág. 503.)

III. **Inserciones.** (Pág. 545.)

Nota: Los proyectos, órdenes del día, actas de votaciones electrónicas, sanciones y demás documentación que acompaña la presente versión taquigráfica obran en el Apéndice.

— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13 y 21 del miércoles 29 de noviembre de 2006:

Sr. Presidente (López Arias). — Con quórum reglamentario, esta sesión está abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (López Arias). — Invito a la señora senadora Silvia Gallego a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los presentes, la señora senadora Gallego procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

2

FACULTAR A LA PRESIDENCIA PARA PASAR A CUARTO INTERMEDIO

Sr. Pichetto. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero hacer una moción para que, en función de los artículos 32, inciso c), y 33 del Reglamento del Honorable Senado, se faculte a la Presidencia para que en el momento en que el cuerpo se quede sin quórum pueda pasar la sesión a cuarto intermedio.

La moción se funda en el hecho de que será una sesión larga y la posibilidad de quedar sin quórum podría ocurrir en algún momento.

Entonces, solicitamos que la Presidencia disponga de esa facultad para continuar con los temas que puedan quedar pendientes durante la próxima semana.

Sr. Presidente (López Arias). — Es una moción que debe votarse.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). — Resulta aprobada.

3

CUESTION DE PRIVILEGIO

Sra. Sapag. — Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente (López Arias). — Para plantear una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora senadora Sapag.

Sra. Sapag. — Señor presidente: este cuerpo y mi persona en particular se han visto agraviados y afectados en su decoro por expresiones, dichos

y pareceres de uno de sus integrantes que de un modo infundado, irresponsable y carente de sustento, no sólo legal y fáctico, sino también moral, ha endilgado al conjunto de senadores, y a mí específicamente, prácticas incompatibles con la ética republicana.

Este senador nacional ha manifestado que en el Senado de la Nación se compran voluntades, que se ha comprado mi voluntad, la voluntad de la senadora Luz Sapag, por la provincia del Neuquén.

Voy a leer textualmente: “Para el senador salteño Ricardo Gómez Díez (Renovador), el nombramiento tiene la finalidad de obtener un voto cautivo a favor del oficialismo. ‘La tienen totalmente controlada [refiriéndose a mi persona] con los pedidos de desafuero, por eso la nombraron en la bicameral’, denunció el legislador en diálogo con ‘La Nación’. Una grave acusación del señor senador nacional por la provincia de Salta, que merece ser tratada, investigada y dilucidada.

Con esta acusación, el cuerpo se ve nuevamente salpicado por supuestas prácticas ilegítimas e ilegales. Sostiene este senador que en este Senado existe la extorsión y que entre los legisladores se practica la extorsión política. Nadie escapa a esta grave denuncia, señor presidente, por lo que insisto en que esto debe ser investigado, considerado y tratado. No sólo me he visto afectada yo en mi persona, sino también el cuerpo se ha visto afectado en su decoro por una infundada denuncia y un agravio personal.

Sabe muy bien el dolido senador, y también lo sabe el cuerpo, que siempre me he manejado en mis opiniones y votaciones conforme a una línea ética, que dicta mis valores morales y mi formación política.

Alarma y duele la injuria de este senador, de un par. Ahora, ¿por qué el senador Gómez Díez, en una actitud prepotente y patoteril, me endilga actitudes reñidas con la moral y la práctica republicana? Supongo que será porque no puedo defenderme o porque me voy a callar o porque su estampa de prohombre lo habilita para injuriarme.

Es por eso, señor presidente, que presento una cuestión de privilegio, sin perjuicio de las acciones que a nivel personal voy a iniciar al

verme injuriada, atacada y agraviada en mi persona.

Creo que lo que pasa es que el senador Gómez Díez no soporta no ocupar un lugar de relevancia en alguna comisión, o tal vez se deba a que el hombre no pueda asimilar la presencia femenina en el recinto, votando y discutiendo temas en los que no siempre coincidimos. La soberbia es mala consejera y obnubila la crítica constructiva, el pensamiento crítico.

El senador alude que la legitimación para ocupar la vocalía que él pretende en la Comisión Bicameral de Tratamiento de los DNU surge de una propuesta acercada por una supuesta mayoría del Bloque Federal. Como es de público conocimiento, y también lo sabe el senador y los integrantes, el interbloque tiene operatividad informal, no decisoria, y es de carácter consultivo, no vinculante.

Fíjese, usted, señor presidente, ¿para qué todo esto? Porque el matutino llega a una llamativa conclusión. Textual del diario “La Nación”: “En realidad, la inclusión de Sapag parece un exceso, cuando el oficialismo cuenta con una holgada mayoría de diez legisladores sobre dieciséis miembros de la bicameral”. Entonces, ¿para qué sería –conforme al pensamiento oscuro, particular, tergiversado, retorcido del senador– el control que ejercería el oficialismo sobre mi persona y mi voto si tiene la mayoría? Eso en el pensamiento atravesado.

Este senador posee una autoestima tan desproporcionada y una pedantería misógina que lo lleva a traspasar los límites éticos, morales e institucionales.

Llamativamente, el día 26 de este mes tuvimos elección en mi provincia y en mi ciudad, San Martín de los Andes. Yo me encontraba disputando una elección interna con el senador Salvatori. Idénticas injurias, gratuitas y anónimas, fueron distribuidas en mi ciudad por correo, e-mail, por pegatinas, sin consignar autores, con similares descalificativos como los utilizados por el senador Gómez Díez, aludiendo a los pedidos de desafuero que se encuentran en el Senado –¡oh coincidencia!– que tanto desvelan al senador.

Pero para tranquilidad del senador, le diré, señor presidente, que estoy acostumbrada, porque históricamente se me ha atacado de esa

manera cada vez que hay elecciones. También quiero decirle que no da ningún resultado, porque en esta votación gané por el 75 por ciento de los votos.

Ya que tanto se preocupa el senador –por los pedidos de desafuero se preocupa ahora, no en su momento; ahora le llaman la atención–, en una de las causas que se me sigue, y en las que se encuentran involucrados funcionarios que me acompañaron en mi gestión municipal, los señores jueces hace muy pocos días han fallado su sobreseimiento, quedando establecido que no existió delito alguno imponible. Así que se puede quedar tranquilo, porque han empezado a determinarse las causas y empezamos bastante bien.

Otra cosa que me llama la atención de este senador es que ha hecho una especie de seguimiento detectivesco de cómo he votado, tipo Sherlock Holmes. El senador critica mi voto positivo en la reducción de los miembros del Consejo de la Magistratura. ¿Pretende el senador que vote como él? ¿Piensa que es ser democrático?

Señor presidente: creo que este senador no vacila en agraviar al cuerpo, a mi persona.

Insisto, señor presidente: creo que este senador no vacila en agraviar al cuerpo, a mi persona, dolido en su ego personal, profesional y político porque sus pares decidieron que no ocupara un lugar en esta comisión. Por eso planteo esta cuestión de privilegio.

Señor presidente: asimismo, quiero decir que en lo personal sepa el senador que poseo un apellido que llevo con honor, que no sólo respalda mi honestidad moral e intelectual, sino también mi independencia de conciencia. Por eso, estoy dispuesta a defender en esta Cámara, frente a la Justicia y cara a cara con el quejoso...

–Murmillos en el recinto.

Sra. Sapag. – Sí, sí: el quejoso senador que hoy no está, a efectos desvirtuar estos graves infundios.

Para finalizar, señor presidente, pido al senador que se retracte o ratifique sus dichos vertidos en el matutino “La Nación” respecto del cuerpo en general y de mi persona en particular.

Asimismo, solicito al pleno que proceda al tratamiento de la cuestión de privilegio en contra del senador Gómez Díez.

Sr. Presidente (López Arias). – La cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

4

PRECIO DIFERENCIAL PARA GAS EN GARRAFA - MOCION DE PREFERENCIA

Sra. Bortolozzi. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi.

Sra. Bortolozzi. – Señor presidente: pido una preferencia para el expediente C.D.-124/06, venido de la Cámara de Diputados.

Se trata de la modificación del artículo 45 la ley 26.020, por la que podría resultar un precio diferencial para el gas en garrafas en las provincias a las que no nos llega la red de gas: Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y norte de Santa Fe.

Formulo esta moción de preferencia no para la próxima sesión, sino para la subsiguiente.

Sr. Presidente (López Arias). – En realidad, no es habitual plantear mociones de preferencia a esta altura de la sesión, pero entiendo que hay asentimiento a efectos de su tratamiento en este caso.

Solicito a la señora senadora que me aclare si la moción de preferencia es con despacho de comisión o sin él.

Sra. Bortolozzi. – Con despacho de comisión.

Sr. Presidente (López Arias). – Con despacho de comisión.

Se va a votar la moción de preferencia con despacho de comisión formulada por la señora senadora Bortolozzi.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada.

5

PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente (López Arias). – Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer.

–El texto es el siguiente:

PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 29/11/06:

Sesión para consideración de acuerdos.

–Consideración en conjunto de los órdenes del día con proyectos de comunicación, resolución o declaración que por Secretaría se enunciarán.

–Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley: 1.244, 1.214 (DNU 1.170, 1.171, 1.172, 1.212, 1.213; DNU con dictamen P.E.-420 y 426), y O.D. de ley 907, 1.146, 1.054 y 1.076.

Preferencia votada con anterioridad:

–Proyecto de ley del senador Terragno y otros, modificando la ley 11.723, de propiedad intelectual. (S.-4.218/06).

Tratamiento sobre tablas a solicitar:

–Dictamen en el proyecto de ley en revisión prorrogando el plazo de vencimiento de la ley para acogerse a los beneficios contemplados por distintas leyes. Indemnización para víctimas de delitos de lesa humanidad (C.D.-112/06) (O.D.-1.243 NI).

–Dictamen en el proyecto de ley en revisión prorrogando la suspensión de exención establecida en un artículo de la Ley de Impuesto a las Ganancias (C.D.-132/06) (O.D.-1.245 NI).

–Proyecto de ley en revisión excluyendo los conceptos comprendidos en diferentes artículos de la Convención Colectiva de Trabajo de Explotación Petrolera (C.D.-133/06).

–Proyecto de ley en revisión estableciendo el Fondo Hídrico de Infraestructura. Especifica al desarrollo de proyectos hídricos en todo el territorio nacional (C.D.-136/06).

–Proyecto de declaración de la senadora Viudes adhiriendo a un nuevo aniversario del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (S.-4.327/06).

–Proyecto de declaración de la senadora Viudes adhiriendo a un nuevo aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos (S.-4.348/06).

–Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso y otros, sobre premio obtenido por la película argentina *Olga, Victoria Olga* (S.-4.136/06).

–Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá y otros, sobre el Festival Internacional de Tango (S.-4.235/06).

Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente (López Arias). – En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.

6

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (López Arias). – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores eventualmente se sirvan efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.¹

7

ACUERDOS

Juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde pasar a sesión de acuerdos.

Por Secretaría se dará lectura a los dictámenes de comisión correspondientes.

En primer lugar, quiero preguntar al presidente de la Comisión de Acuerdos, senador Guinle, si la votación la vamos a hacer uno por uno, como corresponde, o si hay alguna propuesta en otro sentido.

Sr. Guinle. – Uno por uno, señor presidente.

Los dictámenes son unánimes. No hay discrepancias ni planteos formulados o volcados en dictámenes de minoría. Si creo que la votación tiene que ser uno por uno.

Sr. Presidente (López Arias). – De acuerdo.

Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero, al doctor Alberto Pravia. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Mensaje 1.357/06.)

En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.²

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Pampuro). – Se registran 32 votos por la afirmativa y 20 por la negativa.

–El resultado de la votación surge del Acta N°...¹

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedado sancionado definitivamente el proyecto de ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Se va a votar la autorización para ser enviada a los organismos pertinentes.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.

10

MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: deberíamos votar los tratamientos sobre tablas y el cambio del orden del día.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Capitanich.

Sr. Capitanich. – Señor presidente: acordamos un método –y creo que el secretario parlamentario lo tiene plenamente identificado, consistente en tratar primero todo el paquete impositivo, o sea, lograr la autorización para el tratamiento sobre tablas de los proyectos sobre transformación de la tasa hídrica en impuestos; la exclusión de los componentes de gravabilidad del impuesto a las ganancias para los trabajadores petroleros, y la prórroga de impuestos, para lo que ya teníamos dictamen.

Sra. Escudero. – Y el expediente C.D.-129/06.

Sr. Capitanich. – Sí, el expediente C.D.-129/06, referido al artículo 13 de la ley 25.798, de preconvertibilidad.

Sra. Escudero. – Hay que habilitar el tratamiento sobre tablas ahora de todos estos proyectos.

Sr. Pichetto. – Que se habiliten los temas mencionados.

Sr. Presidente (Pampuro). – Se enunciarán por Secretaría.

Sr. Secretario (Estrada). – Expedientes C.D.-132/06, proyecto de ley en revisión de la

exención establecida en el artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias; C.D.-133/06, proyecto de ley en revisión por el que se excluyen los conceptos comprendidos en los artículos 39, 69, 80 y 81 de la Convención Colectiva de Trabajo 396/04, de explotación petrolera; C.D.-136/06, proyecto de ley en revisión por el que se establece el Fondo Hídrico de Infraestructura Específica al desarrollo de proyectos hídricos. Esos son los tres proyectos de carácter impositivo.

Sra. Escudero. – El expediente C.D.-129/06 sobre modificación del artículo 23 de la Ley de Refinanciación de Créditos Hipotecarios.

Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, también habilitaríamos el expediente C.D.-129/06, por el que se modifica la ley 25.798, regímenes de refinanciación hipotecaria sobre creación de la Unidad de Reestructuración de Mutuos Hipotecarios y Preconvertibilidad; y el expediente 2.568/05, modificación al artículo 9° bis de la Ley de Lealtad Comercial, sobre el redondeo de los centavos.

Sr. López Arias. – Perdón, señor presidente...

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador López Arias.

Sr. López Arias. – Hay un último tema a votar sobre tablas, que es el relativo a la ampliación de los plazos en los delitos de lesa humanidad. Se trata del C.D.-112.

De esta forma, ya habilitamos todos los sobre tablas y después se ordenan en función de lo que se había acordado antes.

Sr. Secretario (Estrada). – Efectivamente, el C.D.-112/06 es un dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda por el que se prorroga en el plazo de dos años la fecha de vencimiento de la ley 25.985 para acogerse a los beneficios contemplados por las leyes 24.043 y 24.411.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: también habíamos pedido la consideración del proyecto sobre los centros de desarrollo infantil. El secretario parlamentario dijo que estaban incluidos. ¿Está incluido o los votamos sobre tablas? Si no está incluido, lo podríamos votar sobre tablas.

Sr. Secretario (Estrada). – Es el Orden del Día N° 1.203, no impreso, dictamen de la Co-

¹ Ver el Apéndice.

misión de Población y Desarrollo Humano por el que se crean centros de desarrollo infantil.

Sr. Pichetto. – Bueno; incorporémoslo en la votación sobre tablas.

Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar la habilitación del tratamiento sobre tablas de todos estos temas.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada.

Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: fijemos una hora estimativa para votar estos temas.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Sanz.

Sr. Sanz. – Señor presidente: quiero aclarar solamente respecto del último punto –creación de centros de desarrollo infantil– que, si bien hemos habilitado su consideración sobre tablas, no está dentro del paquete en tratamiento ahora. ¿Puede ser?

Sr. López Arias. – ¡Después se ordena!

Sr. Sanz. – Por eso; ahora hacemos la lista de oradores y...

Sr. Pichetto. – Primero consideramos los temas económicos y luego vamos a incluir todo lo social.

Sr. Sanz. – Bien; era para eso, nada más.

Sr. Pichetto. – ¿Hora estimativa de votación? ¿Las 17?

Sr. Presidente (Pampuro). – ¿A las 18?

–Murmullos en el recinto.

Sr. Sanz. – ¿Consideramos todos los temas juntos o uno por uno?

Sr. Pichetto. – A las 17 y 30.

Sr. Presidente (Pampuro). – Bueno, a las 17 y 30.

Sr. Pichetto. – Está bien.

Sr. Presidente (Pampuro). – La hora estimativa de votación son las 17 y 30.

Entonces, comencemos con los temas...

Sr. Capitanich. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Capitanich.

Sr. Capitanich. – Confeccionemos la lista de oradores, señor presidente.

Sr. Presidente (Pampuro). – Entonces, la hora estimativa de votación son las 17 y 30. Ahora procederemos a confeccionar la lista de oradores.

11

C.D.-132/06: Prórroga de suspensión de exención del impuesto a las ganancias.

C.D.-133/06: Exclusión de conceptos de la Convención Colectiva de Trabajo de Explotación Petrolera.

C.D.-136/06: Creación del Fondo Hídrico de Infraestructura Específica.

C.D.-129/06: Modificación de la ley 25.798 (Regímenes de financiación hipotecaria, sobre creación de una unidad de reestructuración, de mutuos hipotecarios. Preconvertibilidad.

S.-2.568/05: Modificación de la Ley de Lealtad Comercial. Redondeo.

C.D.-112/06: Prórroga del vencimiento de la ley para acogerse a los beneficios contemplados por distintas leyes-indemnización para víctimas de delitos de lesa humanidad. – Centros de tratamiento infantil.

Sr. Secretario (Estrada). – El primer tema es el C.D.-132/06, suspensión de la exención establecida en el artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: quería saber si estamos de acuerdo con que el orador se refiera a todos los temas en tratamiento una sola vez, y no uno por uno.

Sr. Secretario (Estrada). – Los tres temas, entonces.

Sr. Pichetto. – Si estamos de acuerdo con este método lo avalamos y, por lo tanto, tratamos todos los temas.

Sr. Presidente (Pampuro). – Todos los temas en conjunto.

Se va a votar la propuesta del senador Pichetto.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Está aprobada. Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. – Para ordenarnos en el discurso, solicito que por Secretaría se enuncien cuáles son los temas que vamos a tratar.

Sr. Secretario (Estrada). – Cómo no; perfecto.

Son los siguientes: C.D.-132/06, que Orden del Día N° 1.245 no impreso, por el que suspende la exención establecida en el artículo 20, inciso 1) de la Ley de Impuesto a las Ganancias; C.D.-133/06, sobre la Convención Colectiva de Trabajo de Explotación Petrolera, exceptuándolos del pago del impuesto a las ganancias; y el proyecto de ley en revisión por el que se excluye los conceptos comprendidos en diferentes artículos de la Convención Colectiva de Trabajo de Explotación Petrolera y C.D.-136/06 por el que se establece el Fondo Hídrico de Infraestructura Específica al desarrollo de proyectos hídricos en todo el territorio nacional.¹

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Giri.

Sra. Giri. – Señor presidente: vamos a aprobar el proyecto de ley en revisión sobre el redondeo porque hay un acuerdo de bloques, pero no vamos a discutirlo.

Sr. Secretario (Estrada). – Los dos expedientes que señalaba el señor senador Sanz son: el expediente C.D.-129/06, por el que se modifica la ley 25.798, Regímenes de Financiación Hipotecaria, sobre creación de una unidad de reestructuración de mutuos hipotecarios; y el expediente S.-2.568/05, originariamente, que viene con modificaciones de la Cámara de Diputados, sobre la modificación al artículo 9° bis de la Ley de Lealtad Comercial.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz. – Señor presidente: hay un solo dictamen respecto del proyecto de ley en revisión por el que se prorroga el plazo de vencimiento de la ley para acogerse a los beneficios contemplados por distintas leyes indemnización para víctimas de delitos de lesa humanidad. Cerramos con esto y ya tenemos el paquete listo.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tengo anotados a los senadores Capitanich, Morales, Rodríguez Saá, Martínez, Sanz, Negre de Alonso, Basualdo y Miranda.

Si hay inserciones, las vamos a considerar ahora.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas las inserciones.²

Tiene la palabra el señor senador Capitanich.

Sr. Capitanich. – Señor presidente: efectivamente nosotros vamos a dar un tratamiento en conjunto –y esta va a ser la intención de mi exposición– de los expedientes C.D.-132/06, C.D.-133/06, C.D.-136/06, C.D.-112/06 y el tema que tiene que ver con deudores hipotecarios preconvertibilidad. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer una exposición en conjunto desde el punto de vista en general, y después haremos las aclaraciones en particular, para que al cierre de la exposición podamos evacuar consultas vinculadas a cada una de estas iniciativas.

Antes de hacer un análisis desde el punto de vista particular y minucioso de cada uno de los proyectos en tratamiento, me gustaría hacer una evaluación desde el punto de vista de la política tributaria y la recaudación en términos nominales y, efectivamente, en términos de la incidencia de la recaudación tributaria en términos del producto bruto interno en el país.

Lo cierto es que nosotros hemos tenido un sistema tributario que –pese a sus imperfecciones y a la existencia eventual de determinado tipo de impuestos denominados “distorsivos”– en general, tuvo una participación creciente, en términos de presión tributaria, respecto del producto bruto interno; es decir, el volumen o la sumatoria total de la recaudación vinculada al Sistema de Seguridad Social, a la materia impositiva, respecto de la evolución del producto bruto interno.

Cuando uno compara a la Argentina con otros países del mundo, cabe destacar el caso de Suecia que, por ejemplo, tiene una relación de recaudación tributaria –o sea, la presión tributaria en términos de producto bruto interno–

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

equivalente al 51 o 52 por ciento. En cuanto a los Estados Unidos, es de aproximadamente el 35 por ciento; y la República Argentina, que en promedio, en los últimos veinte años, estaba en torno al 20 por ciento, tuvo un incremento significativo hasta llegar, en términos consolidados —es decir, la sumatoria de los recursos de jurisdicción nacional más provincial, más municipal— a una cifra cercana al 30 por ciento del producto bruto interno.

Y esto lo hacemos en el marco de la existencia de una población económicamente activa que ha crecido hasta llegar a aproximadamente 18 millones de personas y de un empleo informal, de carácter estructural, que aqueja la capacidad de recaudación del sistema de seguridad social y genera un pasivo contingente de largo plazo, en virtud de la incapacidad de obtener financiamientos para corregir esta asimetría intertemporal, desde el punto de vista de que los trabajadores activos deben, inexorablemente, financiar a quienes se jubilen.

Actualmente, casi el 40 por ciento de la población económicamente activa pertenece a la economía informal —o sea, al empleo informal—, pese a que el empleo formal creció de un modo significativo, logrando una reducción del empleo informal entre 7 y 10 puntos, de acuerdo con la proyección del año 2006. En efecto, logramos una disminución de la tasa de desocupación de casi el 25 por ciento al 10,2 por ciento. Según la última medición, hemos llegado al 9,8 por ciento en el mes de mayo, con una tasa alta de crecimiento, con un empleo formal importante; lo que en términos de crecimiento es una recuperación del poder adquisitivo y también de la distribución del ingreso. Sin embargo, tenemos que trabajar fuertemente para reducir el empleo informal, que es la fuente inagotable de ahucamiento de la base global del sistema tributario.

Ahora bien, cuando analizamos el sistema tributario argentino, debemos analizar en primer lugar la evasión fiscal. En 2002, el impuesto al valor agregado tenía una evasión equivalente a casi el 35 por ciento y hoy está en torno al 21 por ciento; o sea que hubo una disminución extraordinaria de la evasión en materia del impuesto al valor agregado. Y esto se produjo como consecuencia de un proceso que permitió la autarquía de la Administración Federal de

Ingresos Públicos, la unificación de la Dirección General Impositiva con la Administración Nacional de Aduanas y con la recaudación del sistema de seguridad social y también, paulatinamente, con la autarquía de contabilización de recursos financieros y de recursos humanos calificados.

Hoy, el presupuesto de la AFIP es equivalente a dos mil millones de pesos aproximadamente. Cuenta con 19 mil agentes de alta calificación, con un fondo de estímulo —es decir, que todos los empleados, cuando más se recauda, más participan en materia de percepción de sus haberes salariales—. Asimismo se registra una disminución de la evasión fiscal y una inversión extraordinaria en materia de tecnología informática.

El año pasado se realizaron 13 millones de declaraciones juradas por Internet; actualmente, se realizan 23 millones. Por lo tanto, la mayor capacidad de la provisión de tecnología por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos permite una mejor vinculación entre el sujeto pasivo y el objeto imponible y un mecanismo de recuperación extraordinaria en la capacidad de recaudación del sistema.

—Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª del Honorable Senado de la Nación, senadora Mirian Belén Curletti.

Sr. Capitanich. — Digo esto porque el impuesto a las ganancias —que es un impuesto que grava la manifestación de riquezas y la capacidad contributiva— es un impuesto directo; por lo tanto es identificable el sujeto que lo paga; nosotros hemos tenido un incremento extraordinario de casi dos puntos del producto interno bruto entre el año 2002 al año 2006. Hemos pasado a una recaudación superior al 5 por ciento del producto bruto interno. Cuando se analizan los impuestos sobre la renta, las utilidades y la ganancia de capital, estamos cercanos a casi 6 por ciento del producto bruto interno.

Por eso considero que es importante remarcar que el sendero de la administración tributaria en la Argentina ha sido el de reducir la evasión fiscal por incremento a las fuentes de financiamiento, generación de fondos, estímulo e inversión en tecnología.

En segundo lugar, por vía de la ley 24.624 ha habido una cuantificación de los gastos tri-

butarios que están en el presupuesto nacional. Nosotros tenemos un gasto tributario significativo que es cercano a los dos puntos del producto bruto interno. Tenemos los impuestos que se denominan distorsivos, que son la sumatoria de aquellos impuestos que, cuando no forman parte de sistemas de compensación con otros impuestos o se agregan a los procesos de generación de costos en la estructura económica, inexorablemente contribuyen a la distorsión del sistema económico en su conjunto.

Me parece que es importante remarcar que en 1998 las ganancias personales en términos del producto interno bruto eran de 1,01 por ciento; en 2006 están proyectadas en un 1,52 por ciento. Las ganancias de las empresas equivalían al 1,97 por ciento, y ahora estamos en 3,5 por ciento. Las ganancias totales, en término del producto, eran equivalentes a 2,98 por ciento en 1998 y hoy estamos en 5,02 por ciento. Es decir que se ha producido un incremento significativo, insisto, de la recaudación del impuesto a las ganancias en términos del producto bruto interno. ¿Por qué razón? Porque ha habido un incremento en el número de empresas, en el volumen de exportaciones, en la tasa de ganancias pero, fundamentalmente porque, pese a las presiones, el gobierno no ha cedido en materia de ajuste por inflación, no ha cedido en la contabilización de los quebrantos que hasta el 31 de diciembre, cuando se produce la salida de la convertibilidad, eran equivalentes a 120 mil millones de pesos; y eso se extingue este año.

En ese sentido, la República Argentina es el único país del mundo que tiene la contabilización de quebrantos en cinco años. En el promedio de los países latinoamericanos es de diez mientras que en los Estados Unidos es de veinte, y no hay sistema alguno que contabilice los quebrantos respecto de ejercicios preexistentes con respecto a ejercicios futuros; esta es una cuestión muy importante desde el punto de vista de la percepción del impuesto a las ganancias.

En segundo lugar, tenemos el impuesto a los débitos y créditos bancarios con la mayor alícuota a nivel mundial: 1,2 por ciento en términos comparativos respecto a los que, efectivamente se utilizan.

Es importante remarcar que los impuestos denominados distorsivos, que equivalen a cerca de 4 puntos del producto interno bruto,

constituyen una fuente extraordinariamente importante de financiamiento, porque si no hay una fuente de financiamiento vinculada a este tipo de impuestos, no vamos a tener superávit fiscal primario ni superávit financiero, pero lo más importante es que no vamos a tener el incremento extraordinario de inversión en infraestructura. Ese incremento permitió que de 3.300 millones de pesos en el ejercicio 2003 se proyectara para el 2007 a 15.500 millones de pesos. Es decir, una cifra extremadamente significativa, casi equivalente a 2,5 por ciento del producto interno bruto, cuando en el 2002 era equivalente a solamente 0,33 por ciento.

Estas consideraciones de carácter general son importantes para hacer una introducción respecto de los proyectos que nosotros vamos a tratar y a la importancia que ellos tienen.

Adicionalmente, como dato final, quiero transmitirles que la recaudación actual proyectada para el ejercicio 2006, incluidas las contribuciones, es equivalentes a 148.023 millones de pesos.

Esto incluye a la administración pública nacional y a los organismos descentralizados; además, se consolidan las fuentes de financiamiento. Hago esta aclaración para que no nos confundamos con lo aprobado con relación al presupuesto.

Es importante remarcar lo siguiente: por el impuesto a las ganancias recaudaremos en 2007 —cuando lo proyectemos— aproximadamente 37.237 millones de pesos, o sea, 5,36 por ciento de producto bruto interno; el IVA neto de reembolso será equivalente a 48.372 millones de pesos, es decir, 6,97 por ciento del PBI, lo que equivale a una proyección del 24,36 por ciento de relación de recaudación y producto, sin contabilizar la sumatoria de impuestos provinciales, municipales y otros recursos adicionales y conexos.

En el expediente C.D.-132 —a través del cual se establece una prórroga de impuestos— están contabilizados diversos tributos.

Una de las iniciativas que pretendemos aprobar es la prórroga durante un ejercicio fiscal del impuesto a los créditos y débitos bancarios; en ese sentido, para el 2007 se proyecta una recaudación equivalente a 12.983 millones de pesos.

Otra de las prórrogas que votaremos hoy es la vinculada con el adicional a los cigarrillos, cuya proyección es de 425 millones de pesos.

Los otros tributos tienen que ver con la exclusión de las exenciones a la gravabilidad del impuesto a las ganancias respecto del reembolso a las exportaciones, y como eso se “netea” de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, no se puede presumir el incremento de recaudación marginal.

Por último, tenemos el tema de la prórroga de la suspensión del crédito fiscal proveniente de bienes de capital en ejercicios preexistentes.

A través del proyecto de prórroga de impuestos estamos aprobando la exclusión de la exención dispuesta por el artículo 20, inciso l), es decir que los reembolsos a las exportaciones en lugar de estar excluidos de la gravabilidad del impuesto a las ganancias, a partir de ahora estarán incluidos. Esto se hizo a partir del 2003, y se mantiene a la fecha. Esta medida oportunamente fue objetada porque se decía que afectaba a la República Argentina en las negociaciones con la Organización Mundial del Comercio, ya que estaba vedada la posibilidad de gravar con el impuesto a las ganancias los reembolsos.

La explicación que técnicamente hemos adoptado es que no se perjudican los intereses comerciales de la República, y que estos reembolsos forman parte de gastos que el contribuyente efectivamente eroga durante el proceso de producción de determinado tipo de bienes y servicios sujetos a exportación.

Lo que hacemos es prorrogar lo establecido por la ley 25.731 en su artículo 1°.

En cuanto a los créditos y débitos bancarios, considero importante remarcar su importancia desde el punto de vista de la percepción de ingresos. Como dije, son 12.983 millones de pesos los recursos proyectados para el 2007, lo que equivale a una contribución de 1,87 por ciento del producto bruto interno.

Cuando se compara la existencia de este impuesto pueden asociarse diversos países: Colombia, Bolivia, Venezuela y el Brasil. La República Argentina es el país de mayor alícuota, porque tiene el 1,2 por ciento, mientras que Venezuela tenía una alícuota sobre los débitos del 0,5 por ciento, pero fue derogada en febrero de 2006; Brasil, se aplica a los débitos con una

alícuota del 0,38 por ciento; Perú, se aplica a los débitos y créditos por un 0,16 por ciento; Bolivia, a los débitos y créditos bancarios por un 0,25 por ciento, y Colombia a los débitos con un 0,40 por ciento.

Pero la historia del impuesto a los débitos y créditos bancarios no empieza en el 2001 sino que, anteriormente, se aplicaban a los débitos bancarios. Y esto parte desde 1976.

En efecto, en el Boletín Oficial del 21 de septiembre de 1976 se publicó la ley 21.415. Esa norma estableció un impuesto sobre los débitos en cuentas corrientes, en cuentas a la vista de las cajas de crédito y en cuentas de cheques postales de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.

Este impuesto se aplicaba solamente a los débitos y tenía una alícuota de 0,2 por ciento. Es decir, un sexto del actual impuesto a los débitos y créditos bancarios.

La ley 21.491 de 1977 redujo la alícuota al 0,1 por ciento. También hubo sucesivas prórrogas por las leyes 21.491 y 21.720 de 1978. También en 1983 se sancionó la ley 22.947, y la alícuota del 0,1 por ciento fue elevada a 0,2 por ciento por medio de la ley 23.313 de 1985. Estuvo vigente hasta 1984 y la última modificación fue la de la 23.496 de 1987.

La ley 23.549 que se sancionó el mismo día que la Ley de Coparticipación Federal —la 23.548— fue la que derogó la ley 22.947 y estableció un impuesto muy similar con una alícuota del 0,7 por ciento.

En 1989, se sancionó la ley 23.760 que introdujo ciertas modificaciones con una alícuota general del 0,3 por ciento.

Así, sucesivamente, lo que puedo decir es que con la ley 23.905 de 1991, cuando asume como ministro de Economía, Domingo Cavallo, se plantea una alícuota del 1,2 por ciento según lo fijado por el decreto 1.076/92. O sea que el impuesto a los débitos rigió casi durante dos años y medio por 1,2 por ciento.

Finalmente, en 2001, se sanciona la ley 25.413. En efecto, el 26 de marzo de 2001, siendo presidente el doctor Fernando de la Rúa y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, se autoriza al Poder Ejecutivo a fijar una alícuota de hasta el 0,6 por ciento. Luego, el decreto 380/01 plantea la alícuota general del impuesto en 0,25 por ciento y el decreto 503/01 la eleva

al 0,4 por ciento y, más tarde, al 0,6 por ciento para débitos y para créditos; o sea, el 1,2 por ciento.

Mediante el decreto 503/01, concretamente del 3 de mayo de 2001, el impuesto a los débitos y créditos bancarios se podía computar como pago a cuenta de los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta y al IVA hasta un porcentaje equivalente al 37,5 por ciento. Esto fue elevado hasta el 58 por ciento a partir del 31 de agosto de 2001 y se agregó un cómputo contra las contribuciones patronales como régimen general y contra la contribución jubilatoria del monotributo.

Por el decreto 315/02, en el pico de la crisis, se derogó toda posibilidad de tomar el impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta de algunos impuestos y en el decreto 534/04 se restableció el pago a cuenta siendo computable contra el impuesto a las ganancias y el impuesto a la ganancia mínima presunta, aunque por una porción menor ya que fue hasta el 34 por ciento de los créditos alcanzados hasta el 0,6 por ciento.

Es decir, hoy hay un sistema de pago a cuenta para dos impuestos, impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima presunta, por un 17 por ciento de la alícuota general del 1,2 por ciento.

Este relato histórico y esta comparación determinan claramente que el impuesto a los créditos y débitos bancarios presenta distorsiones, en tanto y en cuanto no tiene descarga respecto de otros impuestos. Pero el monto, el volumen total de recaudación –casi equivalente a 1,87 por ciento del producto bruto interno–, hace aconsejable una prórroga en virtud del impacto que tiene en materia de recaudación. Repito: 1,87 por ciento, 12.983 millones de pesos, estipulados en el presupuesto del ejercicio 2007. Es decir, que es una fuente importante de recursos para el fisco nacional.

Es cierto que esto genera desincentivos desde el punto de vista de la formalización en materia de las transacciones bancarias. Asimismo, he tenido la posibilidad de recibir a los representantes de la Cámara de Distribuidores Mayoristas, quienes me han planteado sus observaciones respecto del impacto que tiene en materia impositiva este trabajo, al igual que las exenciones que existen para transacciones del

sector público o también para las operaciones bursátiles. El impacto que tiene para la cadena mayorista es equivalente al 2,5 por ciento de la estructura de costos.

Otra cuestión muy importante para destacar es que en la década del 90 se produjo una fuerte concentración de la actividad en hipermercados. Antes se distribuía de la siguiente manera: un 60 por ciento de la actividad se concentraba en el sector mayorista y distribución minorista; luego, pasó a ser exactamente al revés. Pues bien, ahora ha vuelto a una relación de 60 a 40 por ciento, lo cual es significativo en términos del paso de fábrica e industria a mayorista y la distribución minorista, con lo que eso significa en la defensa del barrio, del quiosco y de los sistemas de distribución directa desde el punto de vista de la capacidad de transacción.

Por eso es importante remarcar que el impuesto amerita un análisis pormenorizado por parte del Poder Ejecutivo y de este Congreso en el futuro para corregir, eventualmente, ciertas distorsiones que afectan a operaciones particulares, como por ejemplo las transacciones entre mayoristas y minoristas, por el efecto multiplicador que esto tiene en la actividad económica, sobre todo en las economías regionales, pueblos, ciudades y comunidades más pequeñas.

De cualquier manera, quiero transmitir que, inexorablemente, la cobrabilidad de este impuesto, su sencillez y la disminución de los costos de transacción emergentes de la recaudación torna absolutamente esencial su mantenimiento en el tiempo porque constituye una fuente de financiamiento absolutamente extraordinaria para la ejecución de políticas públicas por parte del gobierno nacional.

Por lo tanto, quiero transmitir esto porque, en general, cuando uno tiene que tomar una definición en políticas públicas lo tiene que hacer en términos comparativos a través de los años. A partir del año 2002 y con el decreto 503 del año 2004, en nuestro país no se han incrementado impuestos. En ese sentido podemos decir que el presidente de la Nación doctor Néstor Carlos Kirchner no solamente no aumentó impuestos en su período de gobierno, sino que los redujo. El decreto 503 permitió un sistema de pago a cuenta contra impuesto a las ganancias e impuesto a la ganancia mínima presunta, que hoy es del 17 por ciento sobre el 1,2 por ciento de la

alícuota. Pero, a su vez, me parece importante remarcar que nosotros hoy tenemos un sistema de pago a cuenta del IVA, por ejemplo, cuando hacemos transacciones a través de tarjetas de débito y de crédito. Si nosotros compramos con tarjeta de débito tenemos una alícuota efectiva del 16 por ciento, porque se produce un reintegro del 5 por ciento de la alícuota general del 21 por ciento. Y cuando hacemos transacciones con tarjetas de crédito tenemos un reintegro del 3 por ciento; o sea, que se aplica una alícuota efectiva del 18 por ciento. Esto tiene un costo fiscal que, para la administración tributaria, es equivalente a 1.000 millones de pesos.

Por eso me parece que es importante, teniendo en cuenta la evolución del impuesto al valor agregado desde 1973 a la fecha —en 1995 aumentó hasta el 21 por ciento—, que existan esos sistemas de registro transaccional en tarjetas de débito y crédito, porque en términos efectivos significa una disminución de la alícuota.

También nosotros tenemos en este proyecto incluido en el expediente C.D.-132/06 la posibilidad de la suspensión del crédito fiscal derivado de los bienes de capital respecto al artículo 24 del texto ordenado de la ley 23.349 y sus modificatorias, de 1997, que a su vez fue convalidado por el artículo 1º, inciso a) de la ley 25.717. Por lo tanto, eso implica una disminución de un costo fiscal para el sector público en términos de percepción.

Además, estamos convalidando hasta el 31 de diciembre de 2007 lo que era el impuesto a la emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos, previsto por la ley 24.625 y modificatorias.

En ese sentido, muchos senadores de las provincias tabacaleras han planteado que si bien el Poder Ejecutivo tenía la facultad de utilizar hasta el 21 por ciento de este impuesto de emergencia, se ha comprometido a usar hasta el 7 por ciento. Tengo en mi poder la nota del licenciado Mario Presa relacionada con el decreto del Poder Ejecutivo. O sea, una vez que esta ley sea promulgada, el Poder Ejecutivo automáticamente va a aplicar el 7 por ciento del impuesto a la emergencia sobre cigarrillos, el impuesto adicional.

Por último, nos parece importante remarcar que la distribución del impuesto a las transacciones financieras es del 70 por ciento para el

Tesoro nacional y del 30 por ciento para las jurisdicciones provinciales. Esta distribución se establece oportunamente en el Acuerdo Fiscal Federal de febrero de 2002. En ese entonces yo era jefe de Gabinete de Ministros. Cuando se logra el acuerdo con los gobernadores de las provincias argentinas, el sistema de distribución se hace con el objeto de establecer una compensación, porque el Estado nacional había subrogado, mediante la emisión de bonos especiales, la deuda pública de las provincias que ingresaron a un sistema de canje. Entonces, el estado provincial emitió un bono a dieciséis años de plazo con tres de gracia, cuya cancelación empezaba a partir del 1º de enero de 2005. A cambio de eso se estableció este sistema de distribución, con un criterio de suerte y verdad, no con un sistema de convenio de afectación específica, como eran los pactos federales de 1999 y de 2000. Esto permitió también una fuente de financiamiento de carácter extraordinario para establecer esta capacidad de financiamiento.

Hoy el gobierno nacional dispone en el presupuesto del fondo fiduciario para el desarrollo provincial, que es equivalente, por ejemplo, en el presupuesto 2007, a 6.040 millones de pesos para reprogramar los servicios de capital de las deudas públicas de las provincias argentinas.

Si bien hay un sistema de distribución de recursos con afectación específica que no es equivalente a lo estipulado por la ley 23.548, lo cierto es que se hace con el objeto de que la Nación establezca mecanismos de compensación para el uso de estos recursos a efectos de reprogramar deuda pública.

Esta es la explicación de carácter general respecto al C.D.-132/06.

Con relación al C.D.-133/06, que se refiere a la convención colectiva de trabajo 396/04, es importante remarcar que se trata de una reforma en el impuesto a las ganancias desde el punto de vista de los conceptos que determinan la gravabilidad del impuesto aplicado a los trabajadores petroleros. Tenemos aproximadamente 14 mil trabajadores petroleros en la República Argentina.

Estos trabajadores petroleros tienen el convenio colectivo de trabajo 396/04, que establece distintos componentes en su sistema de remuneración. Y algunos rubros integrantes del salario estaban sujetos a la retención del impuesto a las

ganancias por parte de las empresas petroleras, pero efectivamente se trataba de conceptos no remunerativos. Paradójicamente estos rubros tenían gravabilidad en el impuesto a las ganancias, pero sobre ellos no se efectuaban aportes y contribuciones. Por supuesto, esto forma parte de la remuneración de un trabajador petrolero que en condiciones determinadas tiene que prestar un servicio, que no es equivalente al del resto de los trabajadores de distintas partes del territorio nacional. Tenemos 14 mil trabajadores petroleros y un costo fiscal estimado de 60 millones de pesos, con la exclusión de estos componentes que forman parte de la estructura de ingresos.

En este sentido, nosotros tenemos que analizar los artículos 34, 39, 60 y 80 del convenio colectivo. El artículo 34 establece que existe un componente en la estructura de ingresos que se denomina “vianda” y señala que cuando el personal comprendido en el presente convenio recargue sus tareas en exceso, de dos horas como mínimo, fuera de su horario normal, las empresas proveerán una vianda para su consumo en el lugar de trabajo adecuada a las necesidades alimentarias del trabajador y a las condiciones de trabajo y ambientales. Indica también la norma que las empresas podrán sustituir la vianda prevista en este artículo mediante la entrega de vales para el almuerzo o vales alimentarios previstos. En función de ello, se fueron estableciendo montos de 22 y 25 pesos, siendo el valor actual de 28 pesos.

Por su parte, el artículo 39 del convenio reglamenta el tema de horas de viaje, sobre todo para aquel personal que hace tareas de perforación, terminación, reparación, intervención, producción, y servicios de ecología y medio ambiente.

¿Qué sucede con los trabajadores petroleros? Y acá hay muchos señores senadores que podrán dar testimonio de ello. Entre los lugares de trabajo y sus residencias existen distancias significativas. Ahora bien, el recorrido entre el lugar de trabajo y el de residencia no forma parte de las horas laborales, por lo tanto, tiene un sistema de remuneración, en virtud de que no existe una línea de transporte organizada desde el mercado sino que debe ser provisto en forma especial, generalmente por una empresa. De hecho, se tiene que establecer una distancia

determinada y un tiempo de recorrido, lo que implica un sistema de remuneración específica que está perfectamente estipulado.

No obstante lo señalado, este artículo 39 establece algunas condiciones. Primero, que el traslado hasta el lugar de trabajo no integra la jornada laboral. Segundo, se establece un sistema especial para la contabilización desde el punto de vista de la categoría o de uniforme. Tercero, que la distancia se cuenta desde el lugar de trabajo hasta el de la residencia, lo cual está sujeto a la siguiente restricción: el tiempo de viaje –normalmente de ida y vuelta– de media hora o menos no se considerará; si dicho lapso excediera la media hora, las fracciones menores a 15 minutos no serán tenidas en cuenta, pero si ellas fueran de 15 minutos o más, se redondearán con la media hora o la hora siguiente, según corresponda.

En el artículo 60 del convenio se establece el concepto de alimentación diaria para los empleados que desempeñen sus tareas en el campo. Allí se fijan distintos mecanismos desde el punto de vista de los montos. Desde el 1º de julio de 2006 hasta la finalización del convenio se establecen 9 pesos por desayuno y 28 pesos por almuerzo o cena –o sea, 65 pesos–, para cada trabajador afectado en concepto de alimentación diaria y vianda, que también está estipulado en el artículo 80, con sus distintos servicios y en el artículo 81 con horas de viaje.

Por lo tanto, hay cinco artículos del convenio que están perfectamente identificados y que con esta reforma se excluyen de la base imponible del impuesto a las ganancias. No obstante, la exclusión de la base del impuesto a las ganancias no determina que las empresas que los emplean no se constituyan en agentes de retención de parte de su salario.

Quiero transmitir que con esto se resuelve un problema de alta conflictividad social y que no genera un tratamiento desigual en los términos previstos por el artículo 16 de la Constitución Nacional, porque igualdad ante la ley significa tratar a la desigualdad con parámetros de desigualdad, es decir, el tema de igualdad solamente entre iguales.

Es importante remarcar que en el artículo 28 del proyecto de presupuesto –que analizaremos el 13 de diciembre–, así como estuvo en el artículo 24 de la ley 26.078, se estipulan recursos afecta-

dos al fondo anticíclico, a fin de utilizarlos para el mínimo no imponible. Recordemos que el artículo 24 de la ley 26.078 implicó un costo fiscal para el Estado nacional equivalente a 1.500 millones de pesos y produjo una reforma en la escala, que se puede advertir claramente. En efecto, de 4.020 pesos pasamos a un monto total equivalente a 6.000 pesos. Por lo tanto, esta modificación en la escala ha sido muy importante desde el punto de vista de la capacidad de funcionamiento de muchas familias.

Digo esto, porque se advierte que existen aproximadamente 700 mil trabajadores cuyos salarios son susceptibles de retención del impuesto a las ganancias. Y lo paradójico es que no hemos podido lograr en este Congreso la sanción de la norma que haga tributar el impuesto a las ganancias a los jueces. Ese es un tema que me parece importante resaltar: los jueces no pagan el impuesto a las ganancias y sí deben hacerlo muchos trabajadores en relación de dependencia. De todos modos, este es un problema de mora del Congreso.

Me parece importante señalar que el artículo 23 de la ley 20.628, y sus modificatorias, de impuesto a las ganancias, establecía una serie de modificaciones desde el punto de vista de la gravabilidad de la alícuota. El sistema anterior tenía un mínimo no imponible de 4.020 pesos para un trabajador en relación de dependencia, ya sea casado con hijos o soltero, y ahora pasó a 6.000 pesos. O sea, representa un 49 por ciento de ajuste. La deducción especial anual era de 18 mil pesos para un trabajador casado o soltero y pasó a ser de 22.800 pesos con la reforma de marzo de este año.

En el caso de las cargas de familia anual, para un trabajador en relación de dependencia casado y con dos hijos era de 4.800 pesos y pasó a ser de 9.600 pesos con esta reforma. El total de deducciones anuales era equivalente a 26.820 pesos para un trabajador en relación de dependencia casado y con dos hijos y pasó a ser de 38.400 pesos. Mientras que para un soltero era de 22.020 pesos y ahora pasó a ser de 28.800. Por supuesto que las deducciones mensuales eran significativas.

No voy a abundar en detalles con respecto al individuo autónomo, porque lo que quiero transmitir es que es probable que con la nueva contabilización del empleo formal, los niveles

de remuneración y el mínimo no imponible, después de la reforma de marzo de 2006, sean menos los trabajadores en relación de dependencia afectados por los sistemas de deducción, en virtud de que las empresas se constituyen como agentes de retención.

Por lo tanto, esta es la justificación existente en cuanto al tratamiento diferencial de los componentes del impuesto a las ganancias respecto de su gravabilidad desde el punto de vista de la base imponible. En términos prácticos, esto significaría un aliciente para el trabajador petrolero, ya que pagaría menos impuesto a las ganancias y, por lo tanto, tendría un incremento de su remuneración mensual y anual en términos efectivos y reales.

El otro expediente que tenemos a consideración es el C.D.-136/06, referido a la tasa hídrica. Cabe destacar que tuvimos una transformación de la tasa hídrica, que fuera creada por el decreto 1.381/01 con una base de 5 centavos sobre el precio de la nafta, con o sin plomo de 92 RON; y también con el metro cúbico de gas natural comprimido.

En efecto, hubo objeciones desde el punto de vista jurídico respecto de la constitucionalidad de la tasa hídrica. Recordemos que esta tasa se crea en el marco de una situación de emergencia generada por inundaciones y que afectaba inicialmente a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Córdoba. Luego, la provincia de Mendoza ingresó al sistema de financiamiento del Fondo Fiduciario Hídrico y, con posterioridad, lo hicieron otras provincias argentinas.

En primer lugar, quisiera hacer una evaluación desde lo normativo. Con esta norma que pretendemos aprobar intentamos transformar la tasa hídrica en impuestos, para terminar con cualquier vestigio de presunta inconstitucionalidad u objeción de carácter formal, legal o sustancial; es decir, garantizar la previsibilidad de la fuente de financiamiento, su constitucionalidad y el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales de un impuesto.

Ustedes saben que por el principio de *non tributum sine legem*, implica que no hay tributo sin ley; y que la fijación de un tributo, implica una ley del Congreso, lo cual estamos subsanando desde el punto de vista de la vigencia de la tasa hídrica.

En este contexto, lo que se hace ahora es establecer la tasa hídrica y transformar el impuesto de suma fija por un impuesto *ad valorem*. La suma fija de 5 centavos pasa a ser 5 por ciento en nafta y 9 por ciento en metros cúbicos de GNC consumido. Es un impuesto que grava a la transferencia.

Consiguientemente se establece el impuesto *ad valorem* en porcentajes; pero también una suma fija de 5 centavos. Por lo tanto, ante posibles fluctuaciones, variaciones u oscilaciones en el precio del combustible —en virtud de la transferencia que se haga del precio de plaza—, lo que ocurre claramente es que si el precio baja, al tener una tasa que opera como piso mínimo, nunca se va a poder recaudar menos de lo que ingresa actualmente; y si el precio de la nafta sube, el carácter de *ad valorem* o porcentaje acompaña la percepción del flujo de ingreso.

Frente a este impuesto no tenemos nada más que decir, en el sentido de que tiene una proyección estimada para 2007 equivalente a casi 400 millones de pesos de recaudación y que beneficia a la totalidad de las jurisdicciones provinciales, porque tiene la modalidad de ser un impuesto de afectación específica; es decir, forma parte de un Fondo Fiduciario Hídrico, en cuyos fines fideicomitivos está esta fuente de percepción de ingresos.

Como hoy tengo que hablar de una cantidad importante de leyes, me tomé el trabajo de plantearles una lectura muy sintética desde el punto de vista de la proyección que tiene este Fondo Fiduciario Hídrico.

El monto total proyectado en un presupuesto plurianual equivale a inversiones en infraestructura hídrica de 3.368.584.615 pesos. Para 2006 se prevén inversiones por 536.664.000 pesos; para 2007, 777.295.000 pesos; para 2008, 573 millones de pesos; y el saldo remanente en 982 millones de pesos. Hay obras licitadas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos por 1.197 millones de pesos y hay convenios firmados por 2.170 millones de pesos.

Estas obras se encuentran diseminadas en todo el país. No voy a enumerar a todas las obras, pero puedo hacer simplemente un *racconto*. Para mitigar los efectos de las inundaciones, desde 2003 a la fecha se llevaron a cabo aproximadamente 300 obras. En el área pampeana central, de 60 mil kilómetros cuadrados, hay veintiséis

obras, de las cuales dieciocho se encuentran en ejecución por 525 millones de pesos. Esto implica la cobertura de los desbordes del río Quinto, los arroyos de la vertiente oriental de la tierra de comechingones, la cuenca de la laguna La Picasa, la región noreste de la La Pampa y la región noroeste de la cuenca del río Salado. Las obras son de carácter plurianual previstas entre 2003 y 2007.

En la provincia de Buenos Aires hay una área de aporte hídrico potencial de 13.329 kilómetros cuadrados y otro tanto ocurre con las provincias de La Pampa, Córdoba, Santa Fe —con 5.300 kilómetros de obras en diversas cuencas hídricas—, o Tucumán, a través de convenios especiales, etcétera.

Pero lo importante es que existen setenta y un convenios del gobierno nacional con veintidós provincias por doscientas noventa obras de infraestructura hídrica, de las cuales actualmente están sesenta y siete en ejecución, por 707 millones de pesos; además de todas las que ya enuncié anteriormente.

Y quiero también transferir las experiencias propias. En el Chaco, el Fondo Fiduciario Hídrico se ejecutó en 2002 como consecuencia de una inundación que afectaba al polo agrícola central de la provincia, y más precisamente a mi pueblo, Presidencia Roque Sáenz Peña, en donde se destinaron 1,5 millones de pesos para realizar dos canales en las calles 67 y 71. Ello implicó terminar con el flagelo de las inundaciones y un sistema de protección de inundaciones en varios departamentos de la provincia, como Presidencia Roque Sáenz Peña, Quitilipe, Presidencia de la Plaza, etcétera.

También este fondo permitió la realización del acueducto complementario en Castelli, por un valor de 4,3 millones de pesos; existen programadas otras obras importantes por 37 millones de pesos y también se terminaron obras de carácter complementario con la provincia de Santa Fe, en los bajos submeridionales, después de treinta años de reclamos, por sumas cercanas a los 22 millones de pesos.

Es decir que el Fondo Fiduciario Hídrico es una muy importante fuente de financiamiento para la ejecución de obras hídricas. Y el proyecto en consideración precisamente también tiene que ver con obras para la prevención de inundaciones, para infraestructura hídrica, es

decir, con un objeto amplio, pero perfectamente estipulado, con afectación específica definida, que permitirá resolver los problemas del manejo integral de cuencas en nuestro país.

Considero que el gran desafío del Fondo Fiduciario Hídrico consiste en propender a un sistema de control y verificación de la hidrovía Paraná-Paraguay, que son 3.300 kilómetros de extensión. La República Argentina necesita la renegociación del contrato para aumentar los pies de calado y mejorar todo el sistema del transporte fluvial. Me parece que es muy importante toda la inversión que se pueda hacer en dragado para mejorar esta vía de comunicación. También es importante remarcar lo que significa la comunicación de la hidrovía con Paraguay, la República hermana de Uruguay, con Brasil, a fin de integrar claramente la región del nordeste argentino y potenciar la capacidad de transporte.

Así mismo, considero que es fundamental hacer obras de protección contra las inundaciones, que afectaron a los argentinos en 1966, 1982, 1986, 1998. Así, se han hecho inversiones sistemáticas que han permitido contar con protección contra las inundaciones para las provincias que más hemos sido afectadas, como Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Misiones. En este sentido, es muy importante lo que se ha conseguido en inversión sistemática durante los últimos veintitrés años de democracia, lo cual constituye una política de Estado sumamente positiva para la protección de las inundaciones.

Hoy tenemos que trabajar en la regulación de cuencas y en los reservorios de aguas, porque el clima es cíclico y muchas veces tiene excesos y déficit. Entonces, es importante establecer sistemas de reservorios; y esta fuente de financiamiento es imprescindible.

Por eso, la regulación del sistema hidrográfico argentino, la regulación del sistema de cuencas, la protección contra las inundaciones y las obras de infraestructura hídricas necesitan una fuente de afectación específica y una programación de carácter plurianual. Y este instrumento, con certeza y con seguridad jurídica, determinan esta perspectiva.

También quiero mencionar la prórroga de la ley 25.985...

Sra. Presidenta (Curletti). – Señor senador: la señora senadora Colombo le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Capitanich. – Sí, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra la señora senadora Colombo.

Sra. Colombo. – Señora presidenta: solicito que la documentación que posee el senador Capitanich sobre los fondos que se han ejecutado, provenientes de la tasa de infraestructura hídrica, se incorpore como inserción en el diario de sesiones, salvo que el senador quiera en este momento brindar un detalle acabado y pormenorizado del destino de esos recursos. Formulo la presente petición, porque nos sucede a muchos senadores que cuando a través de proyectos de comunicación solicitamos información respecto de estos temas, realmente no logramos acceder a ella.

Sra. Presidenta (Curletti). – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Capitanich.

Sr. Capitanich. – Señor presidente: puedo agregar lo pedido a la versión taquigráfica. Y para ser más práctico aún, voy a pedir que por Secretaría se efectúe la copia respectiva, para que la senadora y el resto de los senadores puedan contar en instantes con dicha información y, así, analizarla.

Nosotros también vamos a tratar el proyecto contenido en el expediente C.D.-112/06, referido a la prórroga de la ley 25.985. En definitiva, esta ley prorrogaba por dos años las leyes preexistentes, números 24.043 y 24.411. Es importante remarcar que el Estado argentino ha tenido una política vinculada con la reparación de las víctimas de la salvaje dictadura militar que ha cometido, desde el terrorismo de Estado, un atropello contra la vida de las personas. Este hecho merece obviamente una reparación histórica. Existen cerca de 10 mil personas que han podido acceder a estos beneficios.

La ley 24.043 estableció beneficios para las personas puestas a disposición del Poder Ejecutivo nacional hasta el 10 de diciembre de 1983, fecha en la que se reinstauró la democracia en la República Argentina. Es decir, la reparación era para aquellas personas que habían sido privadas de su libertad, detenidas o puestas a disposición de tribunales militares desde la declaración del estado de sitio. En este sentido, se establecía

un mecanismo de remuneración equivalente a la treintaava parte del escalafón superior de la administración pública nacional. Y debo aclarar que esta reparación se extendía a los derechohabientes, a efectos de hacer una reparación explícita, taxativa e histórica.

Por su parte, la ley 24.411 también fijó una reparación para aquellos sujetos que estuvieron privados ilegítimamente de la libertad y para el caso de la desaparición de personas, cuyos beneficios indemnizatorios se extendían también a los causahabientes.

La solicitud de extensión de la prórroga por dos años más es porque muchos beneficiarios tienen procesos de trámite sin ejecución efectiva. Y la segunda cuestión es que el trámite correspondiente y el otorgamiento de los beneficios implica información adicional para el seguimiento de las causas. O sea, la extensión de estos beneficios para la política de derechos humanos, que constituye una política de Estado y cuyo principal abanderado es el presidente Néstor Kirchner, establece un doble efecto: la reparación del daño ocasionado a la víctima y el avance de las causas actualmente en proceso mediante el aporte de información.

Por último, fundamentaré en general la modificación del artículo 23 de la ley vinculada a los deudores hipotecarios “preconvertibilidad”.

En este Congreso tratamos anteriormente una ley para resolver la situación de los deudores hipotecarios. Al respecto, están en proceso de resolución aproximadamente 1.500 causas en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esperemos que antes de fin de año podamos contar con un fallo que dé certeza, garantía y seguridad jurídica para que los deudores hipotecarios puedan liquidar lo que deben al factor de conversión equivalente a 1,83, sobre la base de la deuda en mora desde el 1° de enero de 2001 hasta el 11 de setiembre de 2003.

Pero nos faltaba un componente adicional: el tratamiento específico de los deudores “preconvertibilidad”. Al respecto, ayer se realizó una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General y, además, hemos estado reunidos con señores senadores pertenecientes a los diversos bloques, a efectos de que el Banco Hipotecario Nacional instrumente una propuesta concreta.

El gerenciamiento de la mencionada entidad fue transferido a un grupo inversor privado, pero la mayoría accionaria es estatal. El gerenciamiento y el *management* están en manos privadas, al igual que las políticas que se adopten.

Cuando se produjo la privatización del banco se transfirió esa cartera preconvertibilidad, que tuvo numerosos conflictos, porque abarca cinco operatorias disímiles entre sí. Una de ellas es la 311, la cual está extendida en todo el país. Son 25 mil los deudores hipotecarios y creo que hay cerca de 5 mil en estado de morosidad.

Muchos de los deudores “preconvertibilidad” están afincados en el Chaco, Corrientes, Mendoza, la provincia de Buenos Aires, etcétera. Pero se trata de deudores que pagaron cierta cantidad de cuotas y que en general tuvieron la posibilidad de pasarse a sistemas de pago a través de la extensión de cuotas, y en los que el valor del inmueble es muy poco significativo con relación al costo de la cuota y de la amortización de intereses y de capital. En consecuencia, requieren un tratamiento especial. Al Banco Hipotecario le planteamos la posibilidad de una eximición de pago para los deudores hipotecarios en virtud del esfuerzo realizado en estas condiciones. Es decir, la condonación lisa y llana del capital y de los intereses de la deuda. Les propusimos una condonación de intereses –compensatorios y punitivos– sobre la base de una reducción del 20 por ciento del capital de la deuda.

Pero es un tema extremadamente complejo que requiere la participación de múltiples actores, tales como el Poder Ejecutivo y una auditoría que verifique claramente esta situación.

Además, expresamos con mucha precisión que nosotros no aceptamos la transferencia de la cartera de deudores “preconvertibilidad” al fondo fiduciario creado por la ley 25.798 y su modificatoria, la ley 26.103 –antes de nuestra última sanción–; que no aceptamos la emisión de bonos como canje de esa cartera; que cualquier otra solución no debería implicar para el Estado nacional erogación alguna y que, a su vez, pretendemos beneficios concretos y tangibles para los deudores hipotecarios.

Esta reforma del artículo 23 establece una reformulación de la comisión integrada por la ley 25.798 y sus modificatorias. Y la segunda cuestión que establece es la posibilidad de un análisis de cada uno de los mutuos hipotecarios

en un plazo de 90 días –30 días tiene el Ministerio de Economía para la conformación de la comisión– y, desde luego, la suspensión en ese lapso de las ejecuciones hipotecarias que afectan a los deudores “preconvertibilidad”.

En el día de ayer, en un plenario de comisiones, estuvieron presentes los diputados Mediza y Cigogna, quienes fueron los que motorizaron la presente iniciativa en la Cámara de Diputados, aprobada prácticamente por unanimidad. En el mismo sentido, como existe pleno consenso entre los miembros de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, y seguramente entre los restantes miembros del cuerpo, es probable que aquí también se apruebe por unanimidad, tal como ocurrió con la anterior iniciativa sobre este tema, ya que siempre nos motiva una gran responsabilidad en el análisis metódico de las posibilidades objetivas y de éxito de una norma de estas características.

Por lo tanto, luego de estas argumentaciones, concluyo con mi exposición y espero mantener un largo silencio. *(Risas)*.

Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz. – Señora presidenta: en el presente tratamiento en bloque de diversas iniciativas, haré mención del proyecto de ley en revisión por el que se prorroga la suspensión de la exención establecida en el artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y al dictamen en el proyecto de ley en revisión por el que se prorroga el plazo de vencimiento de la ley para acogerse a los beneficios contemplados por distintas leyes en lo que hace a indemnización de víctimas de delitos de lesa humanidad.

Por otra parte, el senador Alfredo Martínez abordará el resto de las iniciativas.

Respecto de la segunda iniciativa mencionada –prórroga del plazo para acogerse a los beneficios de las leyes 24.043 y 24.411–, adelanto que nuestro bloque votará en forma afirmativa, y me parece que huelgan mayores consideraciones, luego de lo que ha dicho el señor miembro informante. El bloque está de acuerdo con la prórroga así como lo estuvo en el momento de sanción de las mencionadas leyes.

Respecto de la primera iniciativa –Orden del Día N° 1.245–, adelanto que haré algunas consideraciones.

El bloque va a votarlo en forma afirmativa en general, en cuanto se trata de impuestos con cuya prórroga está de acuerdo, aunque no en el caso puntual del impuesto a los débitos y créditos bancarios, o impuesto al cheque, sobre el que haré algunas consideraciones.

Quisiera decir en esta ocasión que, siguiendo la línea argumental del miembro informante, que ha hecho una introducción sobre la política tributaria existente en el país, no está en discusión el valor del superávit primario en la configuración del modelo económico de la Argentina sino que, en realidad, lo que se discute es la conformación de la estructura tributaria que da lugar al antedicho superávit primario.

Una de las pocas oportunidades que hay en el Parlamento para hablar de la estructura tributaria es, precisamente, los fines de año, cuando nos ocurre exactamente lo mismo; es decir, hay que aprobar las iniciativas a poco de su vencimiento, ya que se corre el riesgo de que, si se discute a fondo una reforma tributaria, el país, el gobierno, el Estado se quedan sin la recaudación de impuestos que son imprescindibles para generar el superávit.

La reflexión que me hago está vinculada a cuál es el sistema tributario vigente en este momento. Un sistema tributario que posee una presión tributaria récord, ya que en 2007 el país destinará más del 30 por ciento de los ingresos a financiar las actividades del sector público. Un país que no le aumenta las tarifas de los servicios públicos a los ciudadanos, aunque sí lo hace con la presión impositiva, que no aparece reflejada en el índice de precios medido por el INDEC. Lo que pasa es que las tarifas sí tienen una gran ponderación en la medición del INDEC y, por esa razón, es que se retrasa una discusión respecto de las tarifas; en definitiva, lo que hacemos es cambiar menor presión en tarifas por mayor presión impositiva, que subsidian costos operativos e inversiones de las empresas de servicios públicos, retardando también una discusión de economía que algún día vamos a tener que dar en nuestro país. Algo se ha hablado hoy respecto de los subsidios de tarifas del transporte de pasajeros. Recién, el señor senador Morales me mostraba un trabajo

muy meduloso que indica cuánto es lo que se subsidia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires respecto de lo que ocurre en el resto del país en materia de transporte automotor.

Acá también se dijo algo acerca del subsidio a los transportes ferroviarios, con algunas “perlititas” como la de los 13 millones de pesos en concepto de interés por subsidios pagados fuera de término a una de las empresas; precisamente, una de las empresas que está más observada a partir de irregularidades que, incluso, han merecido la intervención de la Justicia.

Además de ello, podemos decir que un nivel del 30 por ciento de presión tributaria no es una característica mala por sí sola. Pero es aterradora si la tenemos en cuenta en función de que la evasión tributaria es de casi el 50 por ciento. Por lo tanto, hablando en forma burda podríamos decir que tenemos a la mitad de la población pagando cero impuesto y a la otra mitad pagando nada menos que el 60 por ciento de los ingresos que genera. Si hablamos de distorsiones en materia de discusiones tributarias, la evasión es la distorsión por excelencia: no hay nada más distorsivo que la dificultad que tiene para competir una empresa que cumple con todas sus obligaciones tributarias con relación a otra del mismo ramo que no lo hace y que, por ende, compite deslealmente.

Ahora bien, la evasión que tiene el sistema tributario está apoyada sobre impuestos que se han creado o aumentado en la emergencia, con la excusa de que eran buenos recaudadores. Todo lo que discutimos cuando debatimos sobre la prórroga de impuestos no es más que impuestos que han sido creados en algún momento por una situación de emergencia o coyuntural y con el mote de ser buenos recaudadores para la crisis. Así, tenemos una alícuota del IVA que se encuentra entre las más altas del mundo, un impuesto al cheque que es inédito para cualquier economía moderna –sobre el que vamos a profundizar un poco enseguida– y de retenciones a las exportaciones de dudoso sustento legal; más dudoso aún, con la presentación de un proyecto de ley que estamos tratando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y que seguramente trataremos acá en los próximos días, para prorrogar su vigencia, mientras el resto de las re-

tenciones se siguen basando en resoluciones del Ministerio de Economía.

Pero, además de ello, quiero decir que el sistema tributario en la Argentina es altamente regresivo, con una participación muy importante del IVA y aún baja en los impuestos al patrimonio y ganancias. En verdad, muchas veces la discusión acerca del carácter progresivo o regresivo del sistema roza la hipocresía, en la que también a veces caemos nosotros mismos; probablemente, uno cae enseguida en esa hipocresía cuando se discute la exención de algunos rubros de los salarios de los trabajadores petroleros, del impuesto a las ganancias; más aún, toda la discusión de estos temas roza bastante la hipocresía en nuestro país. Puntualmente, me estoy refiriendo a las frecuentes manifestaciones que escuchamos y que, incluso, nuestro bloque ha pronunciado, con respecto a los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias.

En realidad, cuando el señor senador Martínez se refiera al tema de los petroleros hablará desde el punto de vista de la igualdad y la equidad tributaria, que es lo que está en juego en ese tema. Pero, normalmente, cuando se habla de los mínimos no imponibles de los trabajadores, de los asalariados, todos tenemos la natural inclinación de decir que los mínimos se suban de tal manera que, prácticamente, nadie que cobre un salario, por más alto que sea, pague impuesto a las ganancias. Y la verdad es que eso es hipocresía, porque no es lo que pasa en los países más desarrollados y serios. En la Argentina, pagan actualmente el impuesto a las ganancias alrededor de 700.000 trabajadores –obviamente, del sector formal: trabajadores en relación de dependencia–. Ese número representa nada más que el 5 por ciento de los 15 millones de trabajadores que conforman la población económicamente activa de la Argentina.

Ahora, la pregunta es: si no queremos que pague el impuesto a las ganancias el 5 por ciento de los empleados en blanco que más ingresos perciben, ¿a quién vamos a pedirle que pague impuestos? Hablo en términos de fijar pautas racionales, maduras y modernas para un sistema tributario en la Argentina.

Al mismo tiempo, estamos cobrando impuestos sobre ganancias contables, no reales, de empresas que debido a la ausencia del ajuste por inflación las estamos castigando. Es decir,

queremos cobrar cada vez menos impuesto a las ganancias a las personas y cada vez más a las empresas, mientras el resto del mundo hace lo contrario. Es al revés de lo que se hace en el resto del mundo. ¿O nos olvidamos que los dueños o accionistas de las empresas son personas? ¿No es acaso lo que se hace en otros lugares del mundo? A esas personas se les cobra el impuesto, cuando por ejemplo, se distribuyen las utilidades, pero no a las empresas mientras no distribuyan ganancia, que pueden utilizar para invertir y generar empleo. Pero, claro, es mucho más fácil cobrarles a las empresas que a las personas. Este es uno de los puntos que vamos desggranando y que a nuestro juicio tienen que formar parte del debate de la reforma tributaria.

También hay que hablar del sinfín de exenciones impositivas. Hay una que no resiste el menor análisis: la exención de las rentas financieras al impuesto a las ganancias. Estamos cobrando el impuesto a las ganancias a empleados que cobran sueldos a partir de un tope pero no estamos cobrando impuesto a las ganancias a las rentas financieras, muchas de ellas producto de la especulación. Hay rentas financieras que tienen que ver con colocaciones que se vinculan con la producción, pero hay muchas rentas financieras que provienen de la especulación.

Por último, no puedo dejar de mencionar la forma en que se reparte esa recaudación tributaria entre la Nación y las provincias. Actualmente, las provincias están recibiendo solamente un 29 o 30 por ciento de la recaudación nacional, mientras que la Nación se queda con el 70 por ciento restante. Esto obedece a las precoparticipaciones que se destinan al financiamiento del sistema previsional nacional. Pero también sucede que la recaudación de los nuevos impuestos no se coparticipa, como en el caso de las retenciones, o sólo se lo hace en una parte menor. Por ejemplo, el 15 por ciento del impuesto al cheque. Desde que está vigente se coparticipa el 85 por ciento a la Nación y el 15 por ciento a las provincias. Sobre este particular me voy a referir enseguida.

El argumento es que obedece a la necesidad de consolidar la sustentabilidad fiscal. Está bien, es cierto, es válido el argumento. Ahora bien, ¿la sustentabilidad fiscal de la Nación no es equiparable a la sustentabilidad fiscal de las provin-

cias, en un país en el cual las provincias tienen la responsabilidad primaria de los servicios esenciales, como seguridad, salud y educación? No se responde esto con las cifras de las obras públicas que la Nación está acordando con las provincias ni tampoco se responde con las cifras de las mejoras en los ingresos provinciales fruto de las mejoras en la recaudación general. Esto se responde solamente cuando modifiquemos lo del 70 y 30, que es el gran nudo gordiano que hoy tenemos pendiente como debate.

Como conclusión de lo que hasta aquí venimos diciendo, tenemos un sistema tributario caro, una altísima evasión, un sistema tributario regresivo basado en impuestos de emergencia, llenos de exenciones impositivas y con un reparto a las provincias sumamente inequitativo. Y todas estas cosas no las decimos nosotros sino que son absolutamente comprobables.

Entonces, ¿no ha llegado la hora, acaso, para que en un momento de normalidad empecemos a discutir una reforma tributaria que pueda obtenerse en base al consenso de quienes tienen un pensamiento progresista, que no dudo que en el caso del Congreso de la Nación podría ser la amplia mayoría? Lo dejamos ahí planteado.

Pasemos al impuesto a los créditos y débitos bancarios. Con relación a los impuestos que en este proyecto se intentan prorrogar, solamente me voy a referir al de los créditos y débitos porque en el de los restantes estamos absolutamente de acuerdo.

Creo que todos coincidimos en que el impuesto a los créditos y débitos bancarios o impuesto al cheque es un gravamen malo. Es un impuesto que nunca elegiríamos si tuviéramos oportunidad de replantearnos nuestro sistema tributario. Es un impuesto malo, porque alienta la utilización del efectivo, desalienta la utilización de los servicios bancarios y dificulta la formalización de una economía que ya de por sí es altamente informal, porque resulta más sencillo ocultar una transacción realizada en efectivo que una bancaria. Pero además es malo en la República Argentina, porque la carga fiscal sobre el capital de trabajo que el impuesto genera es particularmente elevada para aquellas empresas menos integradas verticalmente, como son las pymes.

Este es un impuesto que ataca de lleno al corazón de las pequeñas y medianas empresas

en el país; pequeñas y medianas empresas que fueron olvidadas durante algunos años —y por eso nos fue como nos fue—, que hoy constituyen el motor del crecimiento y a las que nosotros tenemos que atender con un sistema tributario que las proteja y no las desaliente. El 60 por ciento del impuesto a los débitos y créditos en la República Argentina es solventado por las pymes.

Este gravamen fue creado como un impuesto de emergencia a mediados de 2001 y, en esa situación fiscal, se priorizó su altísima capacidad recaudatoria por sobre los múltiples perjuicios que generaría respecto del blanqueo y la bancarización. Por esas razones se decidió que su vigencia fuera por un tiempo determinado; pero la verdad es que año tras año lo venimos prorrogando. Entonces, insisto: alguna vez vamos a tener que discutir sobre sus bondades o no.

Con la prórroga del impuesto —y aquí es donde tengo muchas consideraciones más profundas para hacer— también se pretende consolidar su distribución. No se trata tan sólo de que el impuesto en sí sea malo: también lo es su distribución. Actualmente, el 30 por ciento de la recaudación del impuesto al cheque es coparticipable. De ese 30 por ciento, sólo el 15 llega a las provincias: entonces, del 100 por ciento sólo el 15 llega a las provincias y el 85 por ciento restante se queda en la Nación.

Ahora quiero referirme al 70 por ciento que tiene asignación específica. Quisiera detenerme en este punto porque podríamos tener una dificultad jurídica con lo que vamos a votar. La asignación específica que llega desde la Cámara de Diputados es para consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico. Quiero recordar que cuando este proyecto ingresó a la Cámara de Diputados, el Ejecutivo lo había enviado con una afectación distinta: solventar los pagos de la deuda pública; así venía escrito por decisión del Poder Ejecutivo.

Cuando uno analiza la versión taquigráfica correspondiente al debate de Diputados advierte que allí se produce una reflexión de algunos diputados de un bloque en particular, indicando que está muy mal que el impuesto al cheque, que grava la producción, etcétera, vaya a solventar el pago de la deuda. Hacen una disquisición muy política; de mucho contenido político más que técnico. Lo cierto es que el bloque oficialista en

Diputados admite la reflexión o la sugerencia, modifica la afectación específica y ahí es donde, en vez del pago de la deuda pública, aparece esto de “a fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico”.

Estoy convencido de que esta nueva redacción podrá ser mejor y dejar tranquilo a alguien desde el punto de vista político —no fue nuestro bloque el que planteó esta cuestión en la Cámara de Diputados—, pero la verdad es que coloca este artículo frente a un grosero vicio de inconstitucionalidad en materia de distribución. ¿Por qué? Porque aquí es donde empieza a jugar, al no haber una afectación específica, el inciso 3. del artículo 75 de la Constitución. Entonces, a mi juicio este impuesto se torna coparticipable. Se violó el concepto de asignación específica, el que no lo haría coparticipable. Haberlo destinado al pago de la deuda pública, como lo quería el gobierno —y que más allá de lo que uno pueda pensar es correcto como afectación específica—, transformándolo ahora en una cuestión tan global y general que es prácticamente como decir “pase a Rentas Generales”, lo convierte en coparticipable. Y va a haber problemas si seguimos con esa tesitura. Yo creo que en ese debate fue tan rápido lo que hizo el bloque del oficialismo que ni siquiera consultaron con el Poder Ejecutivo. De lo contrario, estoy seguro de que alguien les hubiera dicho que mantuvieran la redacción del pago a la deuda pública. Hoy creo que estamos en problemas.

Lo digo como reflexión para que si el bloque del oficialismo en esta Cámara comparte este criterio corrija este error porque aún está a tiempo y aunque la iniciativa tenga que volver a la Cámara de Diputados, porque el riesgo es muy grande. En ese sentido, si no se corrige lo que a mi juicio es un error, esto puede ser motivo de una discusión coparticipable con cualquiera de las provincias.

Proyecto de ley de pago a cuenta. Ese es un subtítulo que tiene que ver con el tema de la asignación.

Sra. Presidenta (Curletti). — El señor senador Capitanich le solicita una interrupción.

Sr. Sanz. — Cómo no.

Sr. Presidenta (Curletti). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Capitanich.

Sr. Capitanich. – Señora presidenta: pedí justamente una interrupción para no dejar escapar el tema, porque me parece que amerita una evaluación desde el punto de vista técnico.

El artículo 3º de la ley 25.413, establece efectivamente que el 70 por ciento de este impuesto ingresará al Tesoro nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo nacional con destino a los gastos que ocasione la emergencia pública, declarada en el artículo 1º de la ley 25.561. Es un caso parecido a la ley 25.239 y a la ley 25.717, en su artículo 11, respecto de la finalidad de financiamiento del Sistema de Seguridad Social. Siempre ocurre así desde el punto de vista de la especificidad.

Lo que usted indica, que es importante, se refiere a las diferencias entre la redacción del proyecto original y la redacción del proyecto en el recinto. En realidad, fue la diputada Graciela Camaño la que propuso la reforma en la versión taquigráfica obrante.

Entonces, cuando se plantea el título V, Otras Disposiciones, el artículo 6º habla de la sustitución en el marco de lo normado del artículo 75, inciso 3), de la Constitución Nacional. Es importante remarcar que el artículo 75, inciso 3), de la Constitución Nacional establece la mayoría especial desde el punto de vista de la afectación de recursos.

En ese sentido, el artículo 75, inciso 3), dice que es atribución del Congreso establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Por lo tanto, para eso se necesitan 37, votos en virtud de la mayoría especial de la Cámara.

La ley, en su artículo 3º, decía que el 70 por ciento de este impuesto ingresará al Tesoro nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo nacional con destino a la atención de los servicios de la deuda pública, contribuyendo a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico. En realidad, se suprimió el párrafo que hace mención a la atención a los servicios de deuda pública y el objetivo de contribuir a la sustentabilidad del sistema económico. En

definitiva, se preserva la finalidad para lo cual estableció la afectación específica.

Sra. Presidenta (Curletti). – Continúa en el uso de la palabra, el señor senador Sanz.

Sr. Sanz. – Señora presidenta: la supresión del párrafo es precisamente la condición de especificidad que tenía en la Cámara de Diputados. Al haberlo suprimido, ahora se lo hace ingresar en el terreno de las Rentas Generales para atender la sustentabilidad del programa económico. El pago de servicios de la deuda tienen tanta especificidad que incluso en el presupuesto general de gastos y recursos está identificado con una partida excluyente. Por lo tanto, ahí sí tenía una afectación especial. Ahora, al haber sacado eso, estamos en una caracterización global. Es una opinión.

Desde luego, el bloque de la mayoría tiene los números como para avanzar o no. Me parece que la exclusión de ese párrafo le ha quitado sustento jurídico vinculado al artículo 75, inciso 3). Reitero, es nuestra opinión.

Por último, hay una situación vinculada con la distribución del pago a cuenta de ganancias que se produce con el impuesto al cheque, que también quisiéramos aprovechar para debatir ahora.

En ese sentido, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda hay un proyecto presentado por nuestro bloque que apunta a eso. Por ende, si no existe la posibilidad de que lo podamos tratar algún día, queremos dejar sentada nuestra posición ahora.

Efectivamente, 0,2 por mil del impuesto al cheque puede destinarse como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. No recuerdo bien si esa decisión se adoptó el año pasado o hace dos años. La discusión radicó en que en lugar de ir bajando la alícuota del impuesto al cheque, se utilizara esta figura en que 0,2 por mil fuera utilizado como pago a cuenta de ganancias. El objetivo fue dar una suerte de aliciente, que no era una rebaja de la tasa pero sí un beneficio para el que paga impuesto a las ganancias.

Ahora bien, se da la situación de que, en la práctica, cuando el Poder Ejecutivo tiene que distribuir este impuesto entre la Nación y las provincias, surge otra cuestión.

Respecto de este pago, de ese 0,2 por mil, hay dos posibilidades: lo distribuye como impuesto

a las ganancias, que sería 50 por ciento para la Nación y 50 por ciento para las provincias; o lo distribuye con la lógica del impuesto al cheque, es decir, 85 por ciento y 15 por ciento. Creo que está demás decir cuál de los dos criterios eligió la Nación: la lógica de distribuirlo como impuesto al cheque, porque seguramente ahí es donde obtiene mayores beneficios. O sea que de ese pago a cuenta del impuesto a las ganancias —que conceptualmente es impuesto a las ganancias, no impuesto al cheque y que, por lo tanto, debería distribuirse 50 por ciento a la Nación y 50 por ciento a las provincias— se ha desvirtuado esta lógica y se lo toma como impuesto al cheque para distribuir 85 por ciento para la Nación y 15 para las provincias.

No hablamos de poca plata. ¡Las provincias argentinas pierden 500 millones de pesos al año! ¡Esto no es poca plata y se da solamente por un capricho conceptual de la Nación! Algunos podrán decir que es por una interpretación; pero, en verdad, no resiste el menor análisis. Cuando esto es pago a cuenta de impuesto a las ganancias, la manera de distribuir es por impuesto a las ganancias; si no, sería impuesto al cheque.

Me parece que es hora también de que nosotros podamos discutir. Y si no lo hacemos por medio de un proyecto separado —reitero que hay un proyecto de nuestro bloque presentado para corregir ese desfase en beneficio de todas las provincias argentinas—, por lo menos, podríamos discutirlo acá, incorporándole al artículo relacionado con la distribución esta cuestión conceptual, para que quede claro cómo debe distribuirse.

Por otra parte, en la segunda parte de nuestro proyecto, pretendemos poner fin a otro abuso de la Nación sobre las provincias, que es la forma en que la AFIP cobra su comisión por la recaudación de impuestos. No lo voy a decir ahora. Pero reitero, es un punto sobre el cual alguna vez tendremos que hablar. Digo esto porque ahí se están quedando también —por una cuestión conceptual equivocada— más de 350 millones de pesos. Si sumamos las dos cosas, estamos en alrededor de 900 millones de pesos que, hoy, por un capricho conceptual, no se están distribuyendo entre las provincias. A la provincia que represento, por la aplicación del índice de coparticipación, le correspondería

más de 30 millones de pesos al año. Reitero: no es poca plata de la que estamos hablando.

En consecuencia, respecto del dictamen vinculado con la prórroga de los impuestos, vamos a acompañarlo en general, porque no tenemos objeciones en cuanto al artículo 1º, referido a la suspensión de la exención del artículo 20 del impuesto a las ganancias. Lo votamos a favor antes, lo vamos a seguir votando de igual manera.

No tenemos inconvenientes respecto de los artículos 4º y 5º, relacionados con el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos. Es cierto que aquí siempre se pide una nota expresa por parte del Poder Ejecutivo. El presidente de la Comisión me informa que ya está en manos de los senadores de las provincias tabacaleras, que es lo que siempre exigen. En ese sentido, lo acompañaremos, al igual que las disposiciones vinculadas con el artículo 7º, que habla de la vigencia.

A su vez, votaremos en contra de los artículos 2º y 6º, que se vinculan con las observaciones formuladas al impuesto al cheque. El artículo 1º prorroga el impuesto al cheque y el 6º es el que afecta el 70 por ciento al Tesoro nacional.

Según la lista de los temas a tratar y dado que hemos hablado del Orden del Día N° 1.243, también está el expediente 132/06. Me falta el tema del redondeo, que el senador Capitanich mencionó y en el que estamos de acuerdo: lo vamos a votar a favor. Entonces, quedarían a cargo del senador Martínez los órdenes del día 133, 136 y 129.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador José J. B. Pampuro.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Sanz. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz. — Señor presidente: como habíamos acordado hacer el tratamiento en bloque, dividimos la tarea: yo me encargué de tres de los proyectos y el señor senador Martínez tratará los otros tres.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Martínez.

Sr. Martínez. – Voy a comenzar por el Orden del Día N° 129/06, que tiene que ver con la modificación del artículo 23 de la ley 25.798, de salvataje hipotecario.

Como bien dijo el miembro informante, nuevamente, se ha avanzado en la constitución de una comisión para que lleve adelante lo que se denomina la unidad de reestructuración. Hoy se conforma de una manera distinta de la original. Así, quedaría en manos del Ministerio de Economía, un representante del Ministerio de Justicia, uno de la Cámara de Diputados, uno de la Cámara de Senadores, uno del Banco Hipotecario y uno de la Asociación de Deudores del ex Banco Hipotecario. Específicamente, tiene que ver con todos los créditos “preconvertibilidad”.

Si bien habíamos abordado con una ley anterior aquello que tenía que ver especialmente con deudores de escribanías –como bien decía el senador Capitanich– y con muy pocos bancos que habían adherido al sistema del fideicomiso del Banco Nación, una vez que terminemos con esto, también nos quedarían pendientes todos los que son del sistema bancario. Esta sería otra de las etapas. De este modo, con esto estaríamos cerrando todo lo que es el universo de los deudores hipotecarios de vivienda única y de ocupación permanente.

Lo que realmente alegra es haber notado, por parte del oficialismo, la decisión política de atacar el tema y de hacerlo en forma definitiva, para buscar soluciones de fondo. No es el mecanismo que utilizamos en algunos momentos, de ir prorrogando y evitar las ejecuciones y los desalojos, ya que la mayoría de las leyes, lamentablemente, tampoco dieron resultado en función de la declaración de distintos jueces que interpretaban que las normas que se habían dictado en el Congreso de la Nación no eran constitucionales. Esto generó todo el problema que tuvieron que ir soportando los diversos deudores.

Por eso, ahora, con la posibilidad concreta de que la Corte pueda funcionar en forma inmediata, lo que estamos esperando, en definitiva, es que haya un fallo sobre este tema para dictar jurisprudencia cuanto antes y que todos los jueces puedan comenzar a trabajar de la manera en que tienen que hacerlo.

Con respecto a lo que se estipula en este proyecto de ley –que, como bien decía el senador Capitanich, se originó en la Cámara de Diputados–, se establece no solamente esta comisión de reestructuración, sino también los plazos. De este modo, se dan 90 días hábiles una vez que esté constituida, luego de que el Ministerio tiene 30 días para poder constituir la, ejerciendo los miembros sus funciones ad honórem. Esto me parece lógico y natural. A su vez, también en este período se da la cobertura para que no haya desalojos ni ejecuciones hipotecarias. Se establece que está dentro del marco de la emergencia, que estábamos viviendo y había sido uno de los elementos tomados por muchos jueces o cámaras para determinar que no eran constitucionales las normas que habíamos dictado. Lo más importante es que se establece un mecanismo mediante el cual se debe determinar cuál es la deuda, su reestructuración, que no exista anatocismo, que no se apliquen intereses punitivos durante todo el lapso que dure el trabajo de esta unidad de reestructuración, etcétera.

Así que, realmente, nosotros estamos conformes con esta iniciativa. En ese sentido, hemos tenido charlas con la gente del Banco Hipotecario sobre las distintas operatorias y propuestas que ellos van a tener que acercarnos y hablamos con mucha claridad de ellas, como la operatorias 311 y otras similares y como el Plan Eva Perón. Sabemos que esa gente pagó y que quienes no lo hicieron, realmente, tienen viviendas que no cuentan con las condiciones como para exigirles absolutamente nada.

Además, también sabemos que las distintas operatorias, reactivaciones y créditos individuales se deben analizar con mucha claridad, porque las distintas modificaciones que tuvieron la aplicación de los intereses, de las cuotas y de los seguros provocaron la aplicación de intereses sobre intereses y su capitalización, conocida como anatocismo. Es decir, en más de una oportunidad se brindaron las herramientas legales al Banco Hipotecario para que burlara la buena voluntad de aquellos que habían accedido a los créditos.

Asimismo, nos encontramos con muchos que fueron obligados por las distintas circunstancias a firmar nuevos mutuos hipotecarios. También es importante tener en cuenta esto

cuando se haga el trabajo sobre cada una de las operatorias.

A su vez, se tiene en cuenta el sistema de la titularización. Es decir, hay muchas personas originariamente pertenecientes a la cartera del Banco Hipotecario que hoy ya no están dentro de ese marco, porque esa cartera ha sido transferida a algún fondo de inversión, habitualmente en el exterior. Por lo menos, existen dos conocidos en los cuales se “securitizaron” las hipotecas. Pero por suerte, en este proyecto también quedan contempladas las condiciones que tienen que tener quienes hayan firmado esos mutuos, porque por más que éstos hayan sido “securitizados”, si las personas involucradas no fueron debidamente informadas y no autorizaron esa operación, deberán ser tratadas de acuerdo con lo establecido en el mutuo original.

En función de este criterio, desde nuestro bloque vamos a apoyar esta iniciativa. Pero también quiero resaltar un trabajo anterior que se llevó adelante con una unidad de reestructuración, respecto del cual existe un informe de los representantes que en ese momento constituían dicha unidad y por parte de este Senado de la Nación. Precisamente, la senadora Escudero elaboró un informe sobre el tema, que compartimos casi en su totalidad. Si se toma como base para esta unidad de reestructuración ese estudio, realmente, se podrá aligerar muchísimo el trabajo que se va a llevar adelante. Esencialmente porque los fundamentos en contra de dicho trabajo anidaban en la posición dura del Ministerio de Economía. Por eso, realmente festejamos la voluntad y decisión política de encarar ahora este tema en forma definitiva.

Por los fundamentos expuestos, quiero adelantar que nuestro bloque va a votar en forma positiva. Esencialmente, manifestando nuestro compromiso de seguir trabajando para poder brindar una respuesta a todo el universo de aquellos que, de buena fe, ingresaron a un sistema debido a la propuesta o al esquema económico imperante en nuestro país y que, luego, se vieron burlados debido a la crisis desatada. Realmente, es una deuda interna que ojalá tengamos la posibilidad de saldar en poco tiempo.

Con respecto al expediente C.D.-133/06, que tiene que ver con el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias a la convención colectiva de los trabajadores petroleros, sabemos

que este proyecto considera los conceptos de los artículos 34, 39, 60, 80 y 81 de dicha convención para no tomarlos como base imponible para el cómputo del impuesto a las ganancias. Estos conceptos—como bien explicó el señor senador Capitanich—tienen que ver con las horas extra de traslado que tiene que efectuar el personal petrolero, en un porcentaje que supera 80 por ciento de aquellos que trabajan en campo, que supera largamente las 4 horas de viaje diario.

El otro tema importante es el comúnmente denominado *vianda* o *ticket*, o sea, tiene que ver con el tema de los alimentos. Como bien dijo el señor senador Capitanich, estos elementos no son considerados para los distintos tipos de contribuciones, pero sí eran consideradas para la liquidación de lo que era el impuesto a las ganancias.

Como bien lo manifestó con anterioridad nuestro presidente de bloque, lo que realmente tenemos que discutir es una igualdad tributaria, una nueva ley tributaria para que podamos contar con un sistema progresivo y no regresivo. Independientemente de que los trabajadores del petróleo tal vez pertenezcan a uno de los sectores con mayores posibilidades económicas.

También es verdad que esa propuesta inmediatamente tomó estado público, sobre todo, después de las reuniones en el Ministerio de Trabajo para ver cómo se resolvía el conflicto de un sector extremadamente sensible como el del petróleo y el de la distribución de combustible.

Nosotros consideramos que esto tenía que trabajarse en forma conjunta. Es por eso que inmediatamente tuvimos noticias, visitas o llamados del gremio de los camioneros y de SMATA, entre otros, que planteaban que ellos también querían tener un tratamiento similar. Es cierto que los convenios colectivos son distintos, pero a igual monto, no había razón para que un gremio viera disminuida su base imponible mientras que otros tenían que seguir tributando lo mismo.

Si bien es verdad que en el presupuesto de 2006 se incorporó en el artículo 23 la potestad al Ejecutivo nacional para que avanzara en el término de 120 días a efectos de su modificación—tal como lo tenemos en este presupuesto—, lamentablemente, esta situación pasó a estar dentro de la agenda de las políticas del Estado

luego de conflictos muy serios. En mi provincia, durante 2005, hubo más de 60 días de cortes de ruta, lo que dejó incomunicadas a varias localidades de la cordillera y durante comienzos de 2006, tuvimos que sufrir la muerte de un oficial de la policía. Todos estos hechos tuvieron vinculación con la base del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. En ese sentido, ojalá que este tema se solucione.

Nosotros acompañaremos esta iniciativa porque nos parece lógico dar una respuesta ante situaciones como esta. Reitero, mucho más cuando se trata de un sector de tan alta sensibilidad, incluso para la seguridad de nuestro país.

Pero realmente nos preocupa que se hayan vuelto a cercenar facultades, a través del artículo 28 del presupuesto, ya que se establece con absoluta claridad que será el Ejecutivo nacional en el término de 120 días el que estudiará la posibilidad de modificar, no solamente este gravamen, sino también el impuesto a los bienes personales. Por lo tanto, todo queda al libre arbitrio del Poder Ejecutivo.

Durante la discusión en la comisión, hubo consenso en decir que se trataba de un tema que había que estudiar, a efectos de ver cómo se podían instrumentar políticas generales y no puntuales sobre un determinado convenio colectivo de trabajo. Pero lamentablemente, de la lectura del artículo 28 ya considerábamos cercenadas las posibilidades del Congreso para debatir este tema, pues a través del presupuesto trasladábamos la adopción de las medidas respectivas al Poder Ejecutivo.

Por los motivos expuestos, consideramos que no es un buen precedente que cuando ocurre este tipo de diferencias no sean el gremio y la patronal –a través de la convención colectiva de trabajo, ya que se trata de un tema salarial– los que resuelvan este tipo de inconvenientes, sino el Estado. La intervención del Estado no es saludable cuando se hace en forma puntual. Es decir, pienso que el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias tendría que haber sido tratado en términos generales, es decir, para todos los sectores de los asalariados.

Independiente de esto, acompañaremos la aprobación de este proyecto de ley.

Además, compartimos la transformación de la tasa hídrica en un impuesto. Esto ocurrió

también cuando en un determinado momento tuvimos que analizar lo que era la tasa del gasoil –se trató hace poco tiempo en el Parlamento– porque, realmente, una tasa debe tener contraprestación y, cuando no sucede, es un impuesto.

También estamos de acuerdo con lo que fijó el decreto 381, que dio origen a la creación de un fondo fiduciario en virtud del cobro de una tasa hídrica.

Como bien lo dijo el señor miembro informante, dicho fondo atendió lo que fueron los problemas de inundaciones en las provincias de La Pampa, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Luego, según la intervención del SIMOP –ente que hoy no participa–, con buen criterio se aseguraba la participación de los estados provinciales y en el manejo de las obras –lo debemos reconocer– hubo una distribución pareja; es decir, 50 por ciento se manejó por medio de la Nación a través de los planes federales y el resto fue destinado a obras en otras provincias, que no son las cuatro que he mencionado.

Sin embargo, luego del decreto 381 se dictó el decreto 508/04 por medio del cual se generó el marco normativo para la ejecución de obras de infraestructura vial e hídrica y sus fuentes de financiamiento –decretos 381 y 976, hídrico y vial respectivamente–.

Se le da la potestad a la Dirección de Vialidad Nacional en el sentido de poder avanzar en la consecución de una serie de obras –varias de ellas están enunciadas en el propio decreto– que, inclusive, no estaban contempladas en el presupuesto y, por ende, necesitaban un mecanismo de financiamiento para poder ser llevadas adelante. Sin embargo, lo que más nos preocupa es que con la sola firma del subsecretario de Recursos Hídricos se autoriza la aprobación de los desembolsos correspondientes a la ejecución de las obras que lleve la mencionada dirección en distintas provincias del país. Pero, además, hay otro elemento que generaliza nuestra preocupación. Me refiero al decreto 906.

Como ustedes saben, por dicho decreto se crea una unidad mediante los ministerios de Economía y de Planificación Federal que otorga la potestad de utilizar montos de los distintos fondos fiduciarios que estuvieren inmovilizados. Sin embargo, como no se define qué es un fondo inmovilizado, cada uno puede interpretar

o entender de un modo diferente qué es un fondo inmovilizado.

Todos sabemos que cualquiera que deba administrar un fondo fiduciario deber ser lo más eficiente posible y, cuando no está comprometido el pago, uno de los aspectos importantes es que se deriven a colocaciones en plazos fijos o compra de letras o bonos para mantenerlo con garantía y con algún rendimiento. Precisamente, conocemos que aquel ha tenido una capitalización de intereses de más de 500 mil pesos según las colocaciones en diversos instrumentos.

Entonces, con el decreto 906, de alguna manera, se autorizaba a la unidad creada por los ministerios de Economía y de Planificación Federal a direccionar los fondos hacia lo que eran obras de energía. Es decir, avanzar en función de la garantía de los pagos para que las obras que se hicieran gozaran del debido repago.

Lamentablemente, esto comienza a desvirtuar claramente lo que debiera ser el objeto específico de un fondo fiduciario. Y al respecto hay varios ejemplos. Cuando se votó la ley 25.798, vinculada con la refinanciación de las deudas hipotecarias, la constitución del fideicomiso en el Banco de la Nación se relacionaba con el salvataje de empresas. En ese momento, el monto ascendía a 450 millones de pesos y solamente ingresaron alrededor de 150 millones, pero luego de mucha pelea y de un largo tiempo. No obstante, muchos de esos montos fueron transformados por la unidad de reestructuración en las famosas LETES y no fueron a donde realmente debían.

Lo mismo podemos decir para el caso del fondo fiduciario creado por la tasa hídrica que, en su momento, realizó un aporte de 70 millones para el Tesoro nacional.

Lo que estamos tratando de explicar es que estamos de acuerdo con transformar una tasa en un impuesto, lo que nos parece excelente. El hecho de que sea un impuesto de afectación específica hace que no podamos discutir desde la provincia que sea coparticipable. Pero también lo que nos preocupa muchísimo es cuál es la herramienta que se busca: es decir, estos fondos fiduciarios que, lamentablemente, han sido absolutamente desvirtuados. Creo que lo peor que nos puede pasar a nosotros es depender del criterio discrecional de un funcionario para ver cuáles obras se hacen y cuáles no y de qué manera se pagan cuando, realmente, lo

que tendríamos que hacer es incorporar en el tratamiento del presupuesto todas estas obras, con la afectación de este impuesto a partir de ahora, que nosotros compartimos.

Aparte, cuando uno analiza la transformación aparece un detalle que es sumamente importante: cuando en el artículo 2° se pasa a un 5 por ciento para las naftas y a un 9 por ciento para el gas comprimido, ello hace que el efecto sea neutro, porque cuando hacemos las cuentas llegamos a la conclusión de que es prácticamente lo mismo.

Nos parece muy bien que se pueda establecer un piso: es decir, el 0,5 por ciento queda establecido en este proyecto de ley como un piso, pero también estamos habilitando a incrementar o disminuir en un rango de un 20 por ciento. O sea, que por este proyecto de ley estamos autorizando al Poder Ejecutivo nacional para que pueda incrementar estos porcentajes del 5 y del 9 hasta en un 20 por ciento. Creo que esta es una nueva delegación que no es lógica ni natural. Estas son potestades de este Congreso, que no debería estar cediendo.

Por otro lado, en la reunión de comisión celebrada ayer observamos una contradicción en el artículo 11. Concretamente, el artículo 11 habla de la estabilidad y la invariabilidad del impuesto; seguramente, esto fue copiado de la época en que había una tasa fija y creo que esto es una contradicción con el artículo 2°, por el cual no sólo se establecen el 5 y el 9 por ciento sino que estamos habilitando al Poder Ejecutivo para que eleve esos porcentajes hasta en un 20 por ciento. Por supuesto que no estoy de acuerdo con que eso sea facultad del Ejecutivo, por cuanto considero que eso debería ser tratado por el Congreso en caso de que debiera ser modificado.

Realmente, esperábamos una herramienta mucho más efectiva y que nos asegurara una mayor transparencia. Estábamos esperando un fuerte martillo, como decía el secretario de Comercio, Moreno, y nos mandaron un serrucho, como ocurrió cuando se generó la posibilidad de que los inquilinos pudieran ser sujetos de crédito para acceder a un crédito hipotecario.

Así que, lamentablemente, si no hay modificaciones con respecto a la herramienta utilizada, que es el fondo fiduciario, no vamos a estar acompañando esta iniciativa.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra Negre de Alonso. – Señor presidente: me toca a mí abordar, en nombre de nuestro bloque, lo relacionado con la unidad de reestructuración para el salvamento –si se lo puede llamar así– de los deudores hipotecarios preconvertibilidad.

Nosotros empezamos en plena emergencia con una ley denominada de salvamento de deudores hipotecarios, donde expresamente siempre se dijo que quedaban afuera de ella los deudores preconvertibilidad. En realidad, esa ley fue muy cuestionada y todavía siguen publicándose fallos sobre las inconstitucionalidades que se están dictando sobre esa norma; a propósito, tengo en mis manos una reciente publicación del 15 de noviembre.

Esta situación de los deudores hipotecarios post convertibilidad la solucionamos a través de la última ley que sancionamos con respecto a la actualización sobre la base del índice de variación del salario, plasmando la teoría del esfuerzo compartido, pero asumimos un compromiso. Recuerdo que en ese momento en la reunión plenaria el senador Capitanich dijo que se estaba avanzando sobre una propuesta de solución para los deudores hipotecarios preconvertibilidad del Banco Hipotecario. Lo resalto por la cantidad de años a la que nos estamos refiriendo.

Aparentemente, por lo que se nos ha informado en la comisión y también la senadora Escudero, que formó parte de la unidad de reestructuración que en su momento se creó, son 120 mil casos, o sea, estamos hablando de 120 mil familias, 120 mil ciudadanos de la República Argentina, que desde antes de la convertibilidad del austral están sujetos a estos avatares de la economía, de la indexación, de los intereses, del anatocismo, de la capitalización de intereses, etcétera, a los que no se les encontraba ninguna solución. Es más, creo que no le encontramos solución hasta hoy, que estamos sancionando una norma intermedia.

El proyecto de ley en revisión en realidad fue debatido en la Comisión de Legislación General. Primero fue expuesto y desarrollado por sus autores, los diputados que vinieron a la comisión, y después se hizo una propuesta diferente, una opción distinta, con mucha autoridad, lógicamente por parte de la senadora

Escudero, que ha participado de esta unidad de reestructuración.

Se cuestionó en primer lugar por qué todos, por qué los 120 mil y no sólo los 25 mil morosos. Se propuso una situación definitiva. No se logró un acuerdo al respecto. Dijo el senador Jeneffes, y con toda razón, que en realidad nosotros no éramos jueces, que éramos el Congreso y que estábamos para legislar.

Creo que tenemos que poner blanco sobre negro, y por eso recalqué que eran 120 mil familias y hoy son 25 mil familias morosas. O sea, la situación a la que hemos llegado no nos permite avanzar ni tiene más posibilidades de una nueva prórroga, sino que debemos tomar un camino que nos lleve a la solución definitiva. Este proyecto, que vamos a apoyar, tiene un procedimiento establecido.

Un primer paso es la integración de una nueva unidad de reestructuración, formada por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, un representante de los deudores y un representante de la entidad bancaria acreedora, que es el Banco Hipotecario Nacional.

Un segundo paso –que es lo más que más se ha cuestionado– es lo que yo llamaría la realización de una auditoría. Estuve pensando y digo que en realidad no nos debemos asustar por esto. Ante la marginación de soluciones por otros caminos, debemos tomar este desafío y avanzar.

Reitero ese artículo y el fallo que leí sobre el amparo por omisión legislativa. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de coadyuvar a una solución definitiva para 120 mil familias –recalco este número porque tiene que ser para todos y no únicamente para los que han caído en mora–; entonces, debemos aceptar el desafío.

A ver: en realidad, lo que establece la ley es una verdadera auditoría a realizar sobre los mutuos. Pero, bueno: a los que somos abogados, contadores, o hemos tenido posibilidad de participar en este tipo de auditorías –máxime con los medios tecnológicos existentes– creo que no nos debe asustar pero sí comprometer la responsabilidad como legisladores argentinos de decir: “Bueno, a pesar de que han pasado tantos años, coyunturalmente hoy somos nosotros los que en realidad debemos tomar el bastón de mariscal y

hacer frente a esta situación con un gran esfuerzo”. Por supuesto, lo que se proyecta y plasma es con un gran esfuerzo, pero creo que se podría hacer realidad una solución definitiva.

Miren: yo la llamo auditoría aunque la ley no lo diga. Lo cierto es que esta comisión —si bien sus titulares son ad honorem tendrá que estar dotada de asesores y de personal especializado— va a revisar el mutuo de origen —esto es, el contrato mediante el cual el deudor sacó su crédito en el Banco Hipotecario—, los intereses que se le aplicaron, las cláusulas de caducidad de plazos —o sea, en dos o tres meses le hago caducar la totalidad del plazo y le ejecuto la totalidad de la deuda—, los pagos a cuenta o los totales —por eso es que habla de revisar la totalidad de los mutuos— y las novaciones —sabemos perfectamente de qué hablamos cuando nos referimos a novaciones bancarias y a reestructuraciones financieras: estamos hablando de algo anterior a la ley de convertibilidad—. Además, va a determinar la deuda y lo hará sobre la base de un índice: el de variación del salario o el de la construcción, según sea más favorable al deudor. Tendrá que realizar todas estas investigaciones.

Ayer yo me hacía todo este escenario y lo explicaba en la comisión. Por supuesto, me gustaba más la propuesta de la senadora Escudero y del senador Jenefes en el sentido de dar una solución definitiva y terminar con el asunto, pero no se logra. No se puede avanzar en una solución definitiva. Entonces, me he desarrollado un escenario y decía: “Bueno, en realidad habría que ir cargando en una computadora los distintos elementos: actualizar las diferentes cuotas de cada uno de los mutuos, compensar, de esa manera llegar a una ecuación, hacer la comparación, aplicar el índice y luego ir al otro paso.” Creo que ese otro paso es un poquito el más cuestionado, consistente en tratar de llegar a un acuerdo entre las partes para la determinación de la deuda.

Sra. Escudero. — ¡Es muy difícil llegar a un acuerdo!

Sra. Negre de Alonso. — Está bien, efectivamente. Pero, ¿sabe qué pasa, senadora Escudero? Usted tiene razón en que va a ser difícil llegar a un acuerdo, pero si no dejamos esta norma le estamos sacando una herramienta a

las partes. A lo mejor estamos suprimiendo un camino: el del acuerdo.

Este tema me hace acordar a que una de las cuestiones que se ha criticado en la modificación de la ley de concursos fue por qué habíamos dejado que si había dinero el juez podría ordenar el pago total. Entonces, lo hemos defendido diciendo: “¡Y, bueno: si no, le sacamos la herramienta al juez!” Yo creo que acá le sacamos la herramienta a la Unidad de Reestructuración —que va a dictar su propio reglamento— para poder tratar de conciliar y que allí termine la situación de los mutuos. Puede ser que un gran porcentaje se concilie, porque estamos hablando, según los informes que nos dieron ayer, de 5 operatorias. Muy bien. Creo que ésa es la parte más controvertida del proyecto.

Ahora bien, ¿cuáles serían las fortalezas? Indudablemente, que se nos está dando a los legisladores —a quienes representen al Senado y a la Cámara de Diputados en esa comisión— una tarea que no es propia de nuestras funciones. Lo cierto es que con responsabilidad social nosotros aceptamos el desafío, integramos la unidad de reestructuración, hacemos la auditoría y le damos una solución definitiva a los 25 mil deudores morosos, porque indudablemente nadie se atrasa en el pago del techo de sus hijos si no es por una situación como en la que están. También comparto el tema de que hay que mirar los 120 mil casos. ¿Saben por qué? Porque nosotros entendemos la situación de toda la gente que ha caído en mora, pero también tenemos que ver la gente que ha cumplido. A lo mejor, ha cumplido a costa de mucho sacrificio o de situaciones muy dolorosas. De lo contrario, se produce una situación de falta de equidad. En otros ámbitos se dice que se premia al que no paga. No miremos las causales, por eso estamos aquí trabajando para llegar a una solución. Reitero, de lo contrario, caemos en lo que vulgarmente se dice: que se premia al que no paga y se castiga al que paga.

Esta situación de estudio, análisis y reestructuración, que tiende como última medida a evitar la falta de equidad en la prestación de mutuos hipotecarios, que tiende a restablecer el equilibrio de estas partes, va a traer también una compensación para aquellos otros que no están en mora y que han venido cumpliendo, cuyas

historias ignoramos porque no es la gente que a lo mejor viene para exponer sus casos.

Aspiro a que el Ministerio de Economía, que es quien tiene la responsabilidad de convocar a esta comisión en 30 días, lo haga. En el caso anterior, ustedes recordarán que yo estaba en la unidad y renuncié porque no se la convocaba, después asumió la senadora Escudero. O sea, pasó más de un año y el Ministerio de Economía nunca nos convocó a trabajar en la Unidad de Reestructuración.

Ahora, así como los legisladores nacionales aceptamos este desafío con responsabilidad social y funcional, también aspiro a que el Ministerio de Economía convoque inmediatamente a la comisión. Si no, no vamos a avanzar en la solución definitiva y seguiremos dilatando la cuestión.

No obstante, éste es el último esfuerzo que el legislador debe hacer. Y digo esto para todos aquellos que escriben sobre los amparos por omisiones legislativas. Si después de esto no se logra restablecer el equilibrio en las prestaciones y superar el estado de falta de equidad, no habrá juez que se anime a declarar la inconstitucionalidad de la leyes que sancionamos, porque la Justicia argentina no tendrá motivo para decir que esas leyes son inconstitucionales.

Vamos a recorrer el camino y arbitrar todos los medios para darle solución, aun reemplazando y supliendo los roles de otros protagonistas de esta Nación Argentina. Sin embargo, si después de esto no logramos un acuerdo—sabemos perfectamente a quien me estoy refiriendo, que puede entorpecer esta negociación que tiene que hacer la unidad de reestructuración— será el Congreso quien dictará una norma que esta vez será definitiva. El Poder Judicial no podrá decir que dictamos leyes inconstitucionales o que no arbitramos los medios para llegar a una solución al amparo de la Constitución.

Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá

Sr. Rodríguez Saá.— Señor presidente: no es tan fácil ordenar el discurso cuando tenemos tantos temas que abordar. Voy a tratar de circunscribirme a dos puntos a los que daré el mismo enfoque: por un lado, la transformación de la tasa del fondo hídrico en impuesto—con la

que por supuesto estoy de acuerdo, a pesar de que no comparto el hecho de que no sea coparticipable y se dé como asignación específica, y ya voy a explicar por qué— y, por otro lado, la prórroga de los impuestos.

Ahora bien, para esto hay que tener en cuenta la reforma constitucional de 1994, que fue una gran lucha de las provincias para aclarar todo el sistema impositivo argentino.

El sistema impositivo argentino se basaba en los impuestos aduaneros, los directos e indirectos y en una gran discusión doctrinaria acerca de cuáles eran los directos y cuáles los indirectos, lo que trajo confusión; y en esa confusión, la Nación iba avanzando con normas de emergencia que se transformaban en definitiva. Se logró agregar a esa cláusula lo siguiente: “Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables”; con lo cual, se decidió que la totalidad de los impuestos—los directos e indirectos—menos los aduaneros, son coparticipables.

Luego estableció una ley convenio, que es una ley que debía tener por origen un pacto entre la Nación y las provincias y que debía ser sancionada por el Senado—como Cámara iniciadora—y que no podía modificarse unilateralmente ni por las provincias ni por la Nación. Esa ley de coparticipación federal sería la que regiría las formas de distribuir estos impuestos. Mientras tanto, se dictó la cláusula transitoria sexta, que establece que en 1996 teníamos la obligación de dictar la ley de coparticipación federal, que nunca se dictó y que observo no hay ninguna intención de hacerlo. En efecto, la Comisión de Coparticipación Federal del Senado—que integro—realizó una sola reunión: la constitutiva y nada más.

Sin embargo, logramos establecer en esta cláusula cosas muy importantes que guardan relación con lo que estamos considerando ahora. Dicha cláusula menciona lo siguiente: “La distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta reforma, no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada; tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma y en ambos casos hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación”. Reitero:

“...tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de los recursos vigente a la sanción de esta reforma...”.

Cabe destacar que a la sanción de esa reforma estaba vigente –aún lo está– la ley 26.313.

Dicha norma determina la forma de distribución primaria y secundaria.

La distribución primaria queda comprendida en el artículo 3º y dice que el monto total recaudado por los gravámenes a que se refiere la presente ley se distribuirá de la siguiente forma: el 42,34 por ciento en forma automática para la Nación; el 54,66 por ciento en forma automática al conjunto de las provincias adheridas; el 2 por ciento en forma automática para el recupero del nivel relativo de las siguientes provincias: Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz –y establece los porcentajes–; y del 1 por ciento para el Fondo de Aportes del Tesoro nacional a las provincias.

Como lo señaló el señor senador por Mendoza, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, hoy la distribución de la coparticipación es del 29 o 30 por ciento para las provincias y del 70 por ciento para la Nación, en violación total y absoluta a las normas vigentes.

Por lo menos, antes se iban disfrazando o tratando de pasar los malos momentos con pactos fiscales que, luego de costosísimas negociaciones, de tiempo, de discusiones y de debates, lográbamos realizar entre los gobiernos provinciales y el gobierno federal. Ello nos permitía, con cierta dignidad y con mucho pluralismo, discutir todas las expresiones de todas las provincias argentinas, fuere cual fuere el gobierno. Me tocó ser gobernador con gobiernos peronistas, de la Alianza, radicales, y siempre nos sentamos y defendimos los intereses de las provincias, que eran comunes, frente a los comunes problemas que siempre tuvo la Nación, de sustentabilidad económico-financiera a la que hace alusión la ley de prórroga que estamos tratando.

Sobre el superávit fiscal no me contestó el miembro informante, quien reconoció que el déficit fiscal se cubre con emisión monetaria o con endeudamiento, con lo cual reconoció que el endeudamiento...

Sr. Presidente (Pampuro). – Perdón, señor senador, el senador Capitanich le pide una interrupción.

Sr. Rodríguez Saá. – Cómo no, señor senador.

Sr. Capitanich. – Usted podrá o no compartir los conceptos, lo que no puede decir es que no le he contestado. Usted afirmó que se generó un déficit fiscal equivalente a 78 mil millones de dólares, lo cual es una barbaridad desde el punto de vista conceptual. Usted podrá compartir o no compartir lo que yo digo.

Sr. Presidente (Pampuro). – Perdóneme, señor senador. Por favor, ¿se puede dirigir a la Presidencia?

Sr. Capitanich. – Me dirijo a la Presidencia.

Lo que digo es cómo se computa –técnicamente– el concepto de superávit fiscal primario financiero, cómo se computa el flujo de erogaciones por encima o debajo de la línea, y esto es lo que simplemente planteo con absoluta transparencia, en el sentido de que puede o no compartirlo; lo que no puede decir es que no le he contestado con absoluta precisión.

Sr. Rodríguez Saá. – Efectivamente, es cierto lo que dice el senador.

También es cierto que finalizada la exposición me prestó un libro el senador Luis Falcó, que se llama *Salir de la crisis. Deuda de ajuste*. Es un libro europeo cuyos autores son George Toussaint y Arnaud Zacharie y en este manual hay una frase de Joan Robinson que dice: “Hay que aprender economía para que no nos engañen los economistas”. Dice que en 2001 el gobierno argentino suspendió el pago de la deuda externa. El mundo comprendió; los que no comprendieron fueron los de acá. Pero eso no importa.

Lo que quiero decir es que si nosotros hacemos una confusión de palabras y términos; si con argumentos técnicos, inentendibles para el común de los ciudadanos, justificamos todas estas cosas, vamos creando una asimetría tan grande en la República Argentina que no estamos construyendo una nación sino nichos de pobreza que –tarde o temprano– van a significar, por la injusticia con que se plantean, duros momentos para el futuro de los argentinos. Por eso me parece que esto hay que hablarlo y corregirlo sin quedarse solamente en las buenas intenciones.

Se dice que hay que hacer una reforma fiscal, que hay que hacer una reforma política. Sí, hace años que estoy escuchando que hay que hacer una reforma política, y al tratar la ley de Diputados, con la “ley mordaza”, se aprobó sin discusión la única modificación de la reforma política, que es la de elecciones internas obligatorias para todos los partidos para elegir los candidatos.

Tenemos que realizar la reforma fiscal en la Argentina para hacer un sistema tributario más justo. Incluir a los jueces en el impuesto a las ganancias es una decisión que podríamos adoptar, si existiese la voluntad política. Se han aprobado sobre tablas y en un día la emergencia económica, la ley que estableció los “superpoderes”, la reforma del Consejo de la Magistratura, etcétera. Entonces, también se podría sancionar una ley que impusiera a los jueces la tributación del impuesto a las ganancias. Se necesita la voluntad política de hacerlo, y no simplemente decirlo. Nuestro maestro, en ese sentido, nos ha enseñado que mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar. Entonces, hagámoslo ya; instrumentemos la reforma fiscal que el país necesita. No podemos establecer semejante injusticia como la que se está llevando a cabo.

Sobre lo recaudado por el impuesto al cheque, el 70 por ciento se lo reserva la Nación, mientras que el 30 por ciento coparticipable queda para la interpretación del 70 y 30. Pero después vendrá esa interpretación. Y lo más grave para las provincias endeudadas –las cuales tienen senadores que las representan en este recinto– es que deberán pagar en 2007 a la Nación 4 mil millones de pesos en concepto de deuda. Si se coparticipara el impuesto al cheque, lo que les correspondería a las provincias sería –con el sistema de la ley de coparticipación, no con la norma que se pretende sancionar– aproximadamente 4.325 millones de pesos.

De esa forma, los gobernadores no tendrían que venir a someterse al mandato político del gobierno de turno, sea del color político que fuere, sino que, con dignidad, podrían plantear –y se lo puede establecer en la ley– que primero se cobra la Nación, hasta quedar saldada la cuenta, como va a ocurrir en el año 2007, porque hay elecciones. Pero sería legalmente. Y así la Nación tendría la misma cantidad de dinero,

porque se cobraría una acreencia que, de otra forma, va a tener que postergar, sabiendo que se posterga hasta la próxima elección.

Me niego a aceptar este sistema de sometimiento, porque es indigno, inaceptable e injusto. Creo que debemos recapacitar y dictar leyes justas. Si prorrogamos los impuestos, tienen que ser coparticipables. Y se debe respetar la Constitución.

Hago estas observaciones en representación de una provincia que no tiene endeudamiento y, por ello, no deberá someterse el año que viene a ningún mandato de ningún gobierno, salvo el de su propio pueblo; lo digo como senador de la Nación, en nombre del federalismo argentino.

Señor presidente: estamos dispuestos a apoyar la ley de prórroga, si la Nación necesita los impuestos. Pero tenemos que lograr que mejore la calidad institucional, que tanto le gusta mencionar a este gobierno. Para ello, a medida que vamos saliendo de la crisis, tenemos que ir corrigiendo los errores estructurales de la Argentina. Justamente, uno de ellos es que las provincias no cuenten con los fondos suficientes para el desarrollo justo y equilibrado de las regiones. Los ciudadanos de todo el país deben tener igualdad de oportunidades, no en la declamación de las palabras, sino en la realidad concreta, a través del esfuerzo propio de sus habitantes. ¿O no son argentinos los que viven en Jujuy, Salta, Tucumán, San Luis, Mendoza, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego y en cada una de las provincias argentinas? Somos tan argentinos como cualquier otro ciudadano. Por lo tanto, debemos tener los mismos derechos y ser todos solidarios en los momentos difíciles que afecten a cualquier otra provincia o región.

A pesar de que vamos a poner toda la buena voluntad para sancionar el proyecto de ley que solucione el conflicto de los trabajadores del petróleo a través de la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, sabemos que sería mejor dictar una ley que tenga como horizonte la igualdad de todos los ciudadanos. Comprendemos que para el desarrollo de la Nación, y por el momento en que se vive, resulta importante contar con este instrumento porque estos trabajadores necesitan sueldos más elevados por vivir zonas desfavorables por la ausencia de comunicaciones y las grandes distancias, pero también debemos admitir, con

un sentido de justicia, que si prorrogamos estos impuestos ellos tienen que ser coparticipables. De no ser así, no admitiremos el artículo 3º, mediante el cual la Nación se queda con el 70 por ciento de la coparticipación, como tampoco admitimos que sean fondos específicos.

Desde 1983, escucho que el río Quinto es pretexto para todos los planes contra las inundaciones. Al respecto, debo decir que el río Quinto nace en San Luis y recorre toda la provincia, pero jamás se ha hecho ninguna obra con los fondos para las inundaciones del río Quinto. Todas las obras que se hicieron fueron provinciales, pagadas con fondos de la provincia de San Luis; pero solucionamos el problema de los excedentes de aguas. Y se están haciendo otras obras que nos permitirán regularlo todavía mejor, a efectos de que ante hechos extraordinarios de la naturaleza tampoco se produzcan desbordes.

Compartimos que se transforme la tasa en impuesto, siempre y cuando éste sea coparticipable, tal como lo establece la Constitución Nacional. Pero si es para un fondo específico o para un fondo fiduciario —que todos cuestionamos porque están fuera del presupuesto y son manejados por funcionarios que ni siquiera sabemos quiénes son para pedirles que nos rindan cuentas—, no estaremos de acuerdo.

Si no se aceptan las modificaciones —seguramente será así—, votaremos en contra; y si se las acepta, votaremos afirmativamente estas dos leyes.

En relación con el proyecto vinculado con las víctimas de la represión, votaremos favorablemente.

Acerca de los deudores hipotecarios habló la senadora Negre de Alonso, y en relación con la modificación del convenio colectivo de trabajo de los petroleros respecto del impuesto a las ganancias, tenemos opinión favorable. No obstante el senador Basualdo planteará algunas observaciones en nombre de nuestro bloque.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.

Sr. Basualdo. — Señor presidente: me referiré al expediente C.D.-133/06.

Creemos que es justo que pueda eliminarse del impuesto a las ganancias los conceptos “viáticos”, “vianda” y “hora de traslado”.

Pero consideramos más justo que esta eliminación pueda extenderse a todos los trabajadores, más allá de que sea un convenio colectivo de trabajo de los petroleros. Pero el mismo reclamo lo harán otros sectores; mañana o pasado reclamarán otros trabajadores —no sé si tendrán la importancia o el peso para lograrlo—, y tendremos el mismo problema.

No nos olvidemos de lo que pasó en marzo de este año en Santa Cruz por no aceptar el Congreso de la Nación que haya ajuste por inflación en el pago del impuesto a las ganancias.

Finalmente, se aumentó el mínimo no imponible y, de esa manera, se solucionó el problema. Sin embargo, esto se hizo para un sector solamente y no resolvió el resto de los problemas.

Entonces, para este caso, me gustaría que los ítem del salario pertenecientes a traslado, viandas y viáticos quedaran afuera de la consideración del impuesto a las ganancias.

Cuando no se quiere reconocer el ajuste por inflación, me gustaría que el senador Capitanich comprendiera que a las pymes, de las que tanto se habla, se las castiga muchísimo por ese no reconocimiento.

Les voy a poner un ejemplo sencillo y claro para que todos puedan entender.

Supongamos que una empresa dueña de una estación de servicio tenía diez mil litros de gasoil o nafta —algo que costaba diez mil pesos— y en el año de la crisis perdió cuatro mil litros quedándole un remanente de seis mil litros —unos 12 mil pesos—, y le obligan a pagar impuesto a las ganancias porque su capital aumentó un 20 por ciento. ¿Qué va a decir el empresario? Que en realidad perdió el 40 por ciento del capital. De ahí, entonces, que corresponde aceptar el ajuste por inflación de una vez por todas. Justamente, por no aceptar esto, es que hubo un muerto en Santa Cruz.

Lo que se ha hecho en el marco del convenio petrolero lo vemos como algo bueno. Sin embargo, más allá de ese arreglo puntual, sería bueno que se pudiera legislar para que todos los trabajadores que en su salario tienen esos ítem no sufran la deducción del impuesto a las ganancias. De lo contrario, habrá más reclamos, y justa razón tendrán si así lo hacen.

Cuando se hablaba del impuesto al cheque y de la visita de los miembros de la Cámara de

Distribuidores Mayoristas, quiero decirle que a nosotros también nos vinieron a ver. ¿Y cuál era el reclamo?

Sabemos que el impuesto al cheque es importante en la recaudación y, más allá de que es realmente leonino, en lo que hace al sector mayorista se lo paga doblemente.

Cuando se decía que el hipermercado en los años 2000 y 2001 concentraba el 60 por ciento de las ventas y el resto quedaba para el minorista, lo que ahora se ha revertido, la razón estaba en que en las crisis siempre la variable de ajuste es para el que menos tiene. ¿A quién iba a dar los beneficios la industria? A los más grandes.

Cuando en el 2002 las reglas del juego fueron iguales para todos, el mercado minorista creció. ¿Pero qué sucede? Que un mercado mayorista para vender 10 millones de pesos necesita quinientas personas, pero el comercio tradicional para vender por ese mismo monto necesita cinco mil personas. Esto quiere decir que el mercado minorista creció muchísimo. Y la preocupación que tienen los distribuidores es lógica. ¿Por qué? Porque tributan dos veces: tributa el impuesto al cheque el mayorista y luego el minorista. Además, también pasa lo mismo con el impuesto a los ingresos brutos. Son los mayores generadores de puestos de trabajo y también los que más impuestos pagan.

Pedimos entonces que las exenciones sean para todos igual y que, para más adelante, se estudie la alícuota del impuesto al cheque porque alcanza a todo el mundo. Y lo digo más allá de entender que es un impuesto muy recaudador, cuyos fondos son necesarios para la obra pública y las necesidades sociales. Pero tampoco hay que olvidarse de los sectores que generan muchos puestos de trabajo y pagan muchos impuestos.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Señor presidente: me voy a referir al proyecto de modificación del artículo 23 de la ley 25.798 que creara el Fondo Fiduciario para Deudores Hipotecarios.

Como lo dijo la senadora Negre de Alonso, en oportunidad de dictarse la mencionada ley, el artículo 23 estableció la creación de una unidad de reestructuración para analizar los créditos preconvertibilidad.

Si recuerdan, dicha ley suspendía todas las ejecuciones hipotecarias, incluidas las del artículo 23, porque había que determinar cuánto se debe. ¿Qué sucedió? La unidad se conformó, pero mientras ello ocurría y avanzaba el trabajo de la comisión, el Banco Hipotecario pedía la inconstitucionalidad de la ley y continuaba con los remates y con las ejecuciones; inclusive, de los deudores preconvertibilidad.

El 23 de noviembre de 2005, hace ya un año, presenté el dictamen, después de un año de arduo trabajo, de muchísimas discusiones y de la imposibilidad de llegar a un acuerdo en el ámbito de esa unidad de reestructuración.

La presentación está hecha y se encuentra contenida en el expediente S.-3.838/05, donde hago un análisis completo de la situación de los deudores preconvertibilidad. Estas familias adquirieron sus viviendas y tomaron los préstamos con anterioridad a la vigencia de la ley de convertibilidad y sufrieron mecanismos indexatorios, desde el inicio de los créditos hasta la sanción de esta norma. Pues bien, a partir de la ley de convertibilidad, hay una estabilidad relativa, el capital no aumenta, pero el banco sí tiene la facultad de incrementar la tasa de interés.

Posteriormente, en 1997 se dicta la ley de saneamiento del Banco Hipotecario y se le da a la entidad la facultad de reajustar las tasas, capitalizar y recalcular los saldos adeudados. Posteriormente, una vez recalculados y capitalizados esos saldos a favor de la institución financiera, se privatiza el Banco Hipotecario. Así, el banco podría modificar la tasa de interés para preservar el valor de los créditos, capitalizando total o parcialmente, aunque el deudor no estuviera de acuerdo.

Mientras los precios al consumidor crecieron durante los seis años de vigencia de la ley de convertibilidad un 62,2 por ciento, el costo de la construcción lo hizo el ciento por ciento y los salarios el 35 por ciento.

El banco, en uso de la facultad que le daba la ley 24.143, fue elevando la tasa de interés, lo que trajo como consecuencia que con el pago de cada cuota el deudor no llegaba a cancelar el *quantum* de los intereses, por lo que el banco capitalizaba el saldo de intereses no pagados al saldo de deuda. Esta perversa situación se llama amortización negativa: el deudor pagaba

y más debía. Esa es la situación de los deudores preconvertibilidad.

¿Qué pasó en el ámbito de la unidad de renegociación? No nos poníamos de acuerdo en los puntos que yo señalo concretamente en el informe. Los borradores, tanto del Ministerio de Economía como del Banco Hipotecario —que actuaban juntos; no eran entidades independientes—, limitaban el universo de deudores a los que había que recalcularles la deuda —en realidad no hablaban de “recalcular”, porque ellos no aceptaban este término, sino de “considerar”— a aquellos que incurrieron en mora con anterioridad al 31 de diciembre de 2003. En eso no estábamos de acuerdo, por cuanto nosotros entendíamos que había que flexibilizar la fecha de la mora. Así mismo, ellos no atendían tampoco las sucesivas modificaciones a que se vieron expuestos los préstamos y no querían volver a las condiciones de origen, que era lo que planteaba nuestro dictamen.

El borrador de dictamen del Ministerio de Economía y del Banco Hipotecario legitimaba o validaba los procedimientos de amortizaciones negativas utilizados por el banco durante largos períodos. Además, proponía el traspaso de esta cartera al Fondo Fiduciario, es decir que el Estado nacional nuevamente se hacía cargo.

Otro tema que no querían considerar era que los préstamos en mora ya se encuentran provisionados por el banco, imputados a pérdida, en un 93 por ciento. Y a pesar de esa imputación a pérdida, el banco ha reportado, y lo sigue haciendo, importantes ganancias en los últimos tiempos. Las provisiones totales del Banco Hipotecario son de 258 millones de pesos.

En mi proyecto planteaba volver a las condiciones de origen, establecer la forma de ajuste de ese dinero efectivamente recibido, aplicarle una tasa de interés, y a lo pagado por el deudor aplicarle el mismo criterio, es decir, el mismo ajuste y la misma tasa de interés. Así las cosas, cruzaba la información y sólo quedaba por ver cuál era el saldo de deuda, dejando de lado intereses usurarios, capitalizaciones, etcétera, etcétera. Por supuesto que ese proyecto ha dormido; no sé por qué el banco y el Ministerio de Economía consideraban que no era conveniente.

Hoy se nos propone un texto que yo creo que tampoco es conveniente. Y no lo es para el banco, ni para el Estado, ni para los deudores hipotecarios.

Los deudores hipotecarios nos han pedido ayer en la comisión que aprobemos este texto, porque tienen la gran esperanza de que sea la solución y se paren los remates. Esa es la única razón por la que voy a votar afirmativamente en general, pero en particular no puedo realmente apoyar algunos párrafos del texto aprobado por la Cámara de Diputados.

Quiero recordar que se está introduciendo una modificación al artículo 23 de una ley que ha sido declarada inconstitucional por los jueces. A raíz de esa declaración de inconstitucionalidad este Congreso hizo un esfuerzo sancionando una ley interpretativa que todavía no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo; es decir, no sabemos en definitiva si se va promulgar, si se va a vetar o si va a ser declarada nuevamente inconstitucional. Digo esto, porque esta ley interpretativa que sancionamos se aparta de la pesificación estableciendo otros criterios; y como la Corte Suprema está por definir la cuestión de la pesificación, no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, no creo que esta herramienta sea racional para dar solución a este problema de los deudores.

Está bien, busquemos una salida, como afirma la senadora Negre de Alonso. Pero resulta que el límite de la salida consiste en crear nuevamente una unidad —como la que se formó en virtud del originario artículo 23—, que debe expedirse en noventa días y que tiene la misma conformación que la anterior.

Ahora, si esta unidad no ha funcionado mientras estuvo vigente, porque el banco igual pedía la inconstitucionalidad de la norma y avanzaba con los remates, ¿qué compromiso tenemos de que con la sanción de esta nueva ley el Banco Hipotecario no va a seguir rematando? Ninguna.

La señora senadora Negre de Alonso dijo “Con mente abierta aceptemos que esta es una auditoría”. Pero no es una auditoría. La unidad de reestructuración no es una auditoría, porque no es un órgano independiente. En efecto, la conforman el Banco Hipotecario, el Ministerio de Economía y los deudores. O sea, no es posible que las partes interesadas, que no han

encontrado una solución, hagan una auditoría tendiente a encontrarla.

Y lo que me parece absolutamente disparatado...

Sr. Presidente (Pampuro). — Senadora...

Sra. Escudero. — Ya termino.

Y lo que me parece absolutamente disparatado es que esa unidad tenga que revisar todos los casos. El proyecto dice que la unidad de reestructuración evaluará cada uno de los mutuos originarios, sus novaciones y reestructuraciones y determinará el estado de deuda actualizada en cada contrato, que será en 25 mil o en 120 mil contratos. Y continúa diciendo la iniciativa que la deuda recalculada que otorgue mejor posición al deudor será comparada con el importe reclamado por la entidad acreedora. Pero resulta que la entidad acreedora es parte de esa unidad de reestructuración.

Advierto que se va a producir nuevamente el empantanamiento que yo ya viví durante un año en esa unidad de reestructuración con la misma composición.

Después dice el proyecto: “Evaluando todos los casos, cuando no se logre un acuerdo de parte [que no se va a lograr], elevará al Congreso una propuesta definitiva que pueda contemplar quitas, recálculo de cuotas o subsidios”.

Pero yo digo: ¿para qué vamos a dar toda la vuelta? ¿Por qué no establecemos ya cuáles son las quitas, los recálculos y los subsidios? O sea, esta unidad va a dar toda una vuelta y van a seguir los remates; no me cabe la menor duda.

Sr. Presidente (Pampuro). — Señora senadora: la senadora Negre de Alonso le solicita una interrupción.

Sra. Escudero. — Sí; cómo no.

Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente cuando hablé de una auditoría, en realidad dije que se asemejaba a una auditoría.

En primer término, quiero recalcar que en esta unidad de reestructuración —y recordemos que la auditoría tiene que ser externa— tres de las cinco partes son absolutamente independientes: el representante del Poder Ejecutivo, el de

la Cámara de Diputados y el de la Cámara de Senadores.

En segundo lugar, quiero decir también que esto tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque hasta ahora se ha estado abordando sólo el tema de los morosos; y este proyecto va más allá. Por eso dije que era una situación de igualdad para los casos de quienes pagaron y no sabemos en base a qué sacrificios. De lo contrario, premiamos al que no paga y al que lo hace lo castigamos. Entonces, dije que me parecía correcto rever los 120 mil casos.

Aprovecho esta interrupción que me concedió la señora senadora Escudero para decir algo que olvidé. Junto con la suspensión de las ejecuciones ahora hay un elemento nuevo, que es la suspensión de los intereses compensatorios, punitivos o moratorios que puedan haber sido pactados en esos mutuos. O sea que en ese paréntesis de tiempo no sólo se suspenden las ejecuciones hipotecarios sino que además se congela el mutuo propiamente dicho.

Para terminar, creo que ésta es la última *ratio*, la última oportunidad que existe. No tenemos un seguro de caución de que no nos van a declarar la inconstitucionalidad de la ley, pero por lo menos —por eso yo dije eso— no podrán escribir y decir: “Amparos por omisión legislativa”.

Hemos extremado los recaudos. Creo que es la última *ratio*. Después de esto, ¿qué?. Nada.

Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. — Señor presidente: agradezco a la señora senadora Negre de Alonso, porque me hizo recordar algo que estaba olvidando.

Cuando ayer el representante de los deudores hipotecarios nos pidió que aprobáramos esto, nos dijo: “Porque esta norma es para todos los deudores preconvertibilidad” Entonces, yo me puse a buscar dónde dice que esto es para todos los deudores preconvertibilidad. Pero no lo dice. Recordemos que se trata de un artículo 23 que se inserta en la ley de deudores hipotecarios, que dice: “Creación del fondo fiduciario para atender las situaciones de los deudores de vivienda única y familiar que incurrieron en mora” y la única diferencia es la flexibilidad de la fecha de la mora, pero en ninguna parte dice que es para los que no están en mora.

En la reunión informal que tuvimos recientemente con las autoridades del Banco Hipotecario nos dijeron que hay aproximadamente 120 mil carpetas, de las cuales en mora están sólo 25 mil. Entonces, con esta norma se está diciendo que se abre a 120 mil, pero en ninguna parte se indica que esto es para todos.

Es decir que la norma se inserta en una ley, la del fondo fiduciario para deudores hipotecarios que incurrieron en mora, y la única diferencia es que la fecha de la mora se flexibiliza. Entonces, yo no sé si la consecuencia de esta sanción va a ser que los que hoy están pagando dejen de hacerlo para ponerse en mora y poder estar en condiciones de obtener esta posibilidad de una gran quita.

Estas son las dudas que me surgen. No está bien escrito. Por eso, yo voy a votar a favor en general y en contra de los párrafos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del artículo 23 de la ley 25.798, contenido en 1° del proyecto que se someterá a votación. Creo que esa unidad de reestructuración tiene que hacer el mismo camino que ya recorrimos y terminar en una pauta general, concreta, sobre cuáles serán las quitas o los métodos de recálculo para abordar la situación de deudores preconvertibilidad en mora.

La idea es que sean pautas generales que se apliquen para todos y no algo que me pongo a revisar cada contrato en forma individual y, según la cara del cliente, resuelvo de una forma o de otra. Nosotros somos legisladores y tenemos que cuidar que lo que aprobamos aquí sean pautas y normas que después los órganos ejecutivos se encargan de aplicar y cumplir.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Rossi.

Sr. Rossi. – Señor presidente: pedí la palabra para definir el sentido de mi voto con relación a la modificación del artículo 23 de la ley 25.798. Lo que estamos tratando es uno de los grandes temas que heredamos de aquellos cimbronazos de la última etapa de la convertibilidad y de la postconvertibilidad.

Obviamente, la realidad marca que los deudores que contrajeron deudas importantes hipotecando sus casas, particularmente con el Banco Hipotecario, han encontrado una desproporción absoluta entre la cuota, su capacidad de pago y el valor de la vivienda que estaban adquiriendo.

En algunos casos, sabemos que hoy por hoy han pagado con creces el precio de la vivienda que están ocupando y que realmente el saldo de la deuda todavía es astronómica o, lo que es peor, en algunos casos ni siquiera saben cuál es éste.

Esto se ha prorrogado en el tiempo y ha generado en su momento la sanción de la ley que hoy estamos modificando y que con el correr del tiempo, en muchos casos, particularmente la Justicia de la Capital Federal, se ha declarado inconstitucional no sólo en primera instancia sino también en la alzada.

Ayer, en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, se buscó fundamentalmente una salida a esta realidad que se ha producido, con la dificultad cierta que de introducir cualquier modificación a la iniciativa en consideración, nos encontraríamos con que la Cámara de Diputados no tendría tiempo para tratarla. En ese sentido, algo que debe ser una mejor respuesta para los deudores hipotecarios, terminaría siendo un vacío legal que le permitiría precisamente a los acreedores –en este caso los bancarios–, quedarse con el esfuerzo y los sueños de tantas familias que ven en su vivienda lo que está en juego.

Por lo tanto, si bien comparto muchos de los términos que ha expresado la senadora Escudero, en quien reconozco a una fuerte luchadora en la problemática de los deudores hipotecarios, adelanto mi voto favorable al proyecto en tratamiento, porque creo que es, por lo menos, una solución o un statu quo mínimo. Tal vez, si tiene algún sentido positivo esta norma es precisamente el de ser la herramienta para suspender la ejecución de los juicios de aquí a noventa días tal como marca el proyecto de ley.

Si eso se cumple mínimamente, nos daría el tiempo material posible para poder trabajar en una solución definitiva. Los mismos deudores hipotecarios saben que en la iniciativa que hoy estamos tratando no se encuentra la solución definitiva sino que sólo constituye un tiempo que estamos ganando.

En este marco, ante esta realidad y con estos alcances es que voy a acompañar el proyecto de ley en tratamiento, comprometiendo también todo mi esfuerzo para que el año que viene, con esta suspensión de remates decidida, trabajemos

sobre una solución de fondo con los proyectos que ya están presentados y con una participación y un compromiso del Estado, particularmente del Poder Ejecutivo, para que encontremos una solución definitiva.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Capitanich.

Sr. Capitanich. – Señor presidente: nosotros hemos hecho una exposición extremadamente minuciosa con respecto a cada uno de los proyectos que están en consideración en este recinto.

Pero a la luz de algunas observaciones formuladas por los distintos señores senadores que me precedieron en el uso de la palabra, quisiera hacer algunas consideraciones con el objeto de responder esas apreciaciones.

En primer lugar, quisiera remarcar que desde el punto de vista de la distribución de recursos de la Nación a las provincias, en 2002 el volumen total de transferencias era equivalente a 15.500 millones de pesos; mientras que la proyección en el presupuesto 2007, en la Planilla de Transferencias de Recursos de Origen Nacional a las Jurisdicciones Provinciales, la cifra es equivalente a casi 46.000 millones de pesos. Esto significa que las transferencias de recursos de origen nacional se han incrementado aproximadamente tres veces, en un período de cinco años, con relación a lo que sucedía en 2000; lo que constituye, en términos reales, un incremento sustancial en la historia de la relación interfinanciera o intergubernamental entre la Nación y las provincias.

Efectivamente, si uno observara la ley 23.548, notaría que tuvo sucesivas reformas.

Sr. Rodríguez Saá. – ¿Me concede una interrupción, señor senador?

Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Capitanich: el señor senador Rodríguez Saá le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Capitanich. – Sí.

Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. – En 2002 la distribución a las provincias era todavía de un peso igual un dólar y eran 20.000 millones. Luego se produce la pesificación y se achica a la tercera parte, tomando ese patrón de medida. Entonces, ac-

tualmente deberían ser 60.000 millones y son 45.000 millones.

Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en uso de la palabra el señor senador Capitanich.

Sr. Capitanich. – Quiero utilizar las herramientas esenciales de la aritmética, ya que establecen específicamente cómo se aplican los mecanismos de ajustes. Cuando menciono un incremento equivalente a tres veces más, me refiero a casi un 300 por ciento. O sea que es superior a la variación de tipo de cambio nominal, al índice de precios al consumidor y a cualquier índice de precios.

Si uno tomara los montos a valores constantes, en dólares corrientes, notaría que en toda la historia de la relación entre la Nación y las provincias ésta es la etapa de mayor transferencia de recursos de origen nacional a las jurisdicciones provinciales.

Por otra parte, me parece importante remarcar la necesidad de determinar cómo se obtiene la fuente de financiamiento y cómo se transfieren estos recursos. En este sentido, resulta fundamental destacar que en algún momento de la historia, gran parte de los recursos de fuente de financiamiento estaban vinculados a la emisión monetaria que, en algunos casos, era equivalente al 50 por ciento; y eso, efectivamente, no se coparticipaba. Cuando la emisión monetaria forma parte de los recursos de financiamiento, éstos no se coparticipan y la tasa de inflación erosiona la transferencia efectiva de recursos.

Por eso, creo que es muy importante remarcar esto, ya que aquí también se plantean múltiples consideraciones respecto de la relación Nación provincias en cuanto a las fuentes de financiamiento...

–Murmullos en las bancas.

Sr. Capitanich. – Es la primera vez que el presidente de mi bloque me solicita que extienda mi exposición. *(Risas)*.

Sr. Presidente. – Por favor, respeten al orador. Usen la aritmética y no la matemática... *(Risas)*.

Sr. Capitanich. – Lo que quería decir con esto es que, en definitiva, la relación Nación-provincias hay que analizarla desde múltiples perspectivas, donde necesariamente debemos trabajar varios conceptos.

El primer concepto es la fuente de financiamiento vinculada con la emisión monetaria. Vuelvo a insistir en esto porque en la época de alta inflación en la Argentina, el 50 por ciento de la fuente de financiamiento era emisión monetaria que no se coparticipaba, lo que implicaba que las provincias se quedaran con el problema del ajuste inflacionario y no con la percepción del recurso para solucionar el problema del financiamiento.

En segundo lugar, desde el punto de vista del endeudamiento, efectivamente, éste era adquirido por la Nación, pero no era transferido a las provincias; por lo tanto, el endeudamiento lo terminamos de pagar todos los argentinos y no se coparticipaba la distribución correspondiente por parte de cada una de las jurisdicciones provinciales.

Me parece que es importante remarcar que en muchos casos, como en el concreto de la precoparticipación, que es el equivalente al 15 por ciento y que forma parte de los recursos tributarios del sistema de seguridad social, esto implica a jubilados, que también tienen un impacto en todo el territorio de la Nación pero que, en definitiva, la Nación, cuando obtiene muchos recursos y en situaciones de emergencia, atiende en forma específica desde el punto de vista de los programas sociales.

Muy concretamente, podemos afirmar que el programa de Jefas y Jefas de Hogar, en el peor momento de la crisis en la Argentina incluía a 2,2 millones de beneficiarios que, en general, estaban distribuidos en cada una de las jurisdicciones provinciales. Es decir, por un lado, se sostienen las fuentes de financiamiento no coparticipables en materia de derechos de exportación, pero, por el otro lado, se utilizaban estos recursos con el objeto de cubrir las demandas y las necesidades de muchos argentinos distribuidos en toda la Nación.

He analizado mucho esto en el caso de mi provincia. El Chaco es una provincia que tiene el cuarto coeficiente de coparticipación federal de impuestos, pero definitivamente cuando analizo las cifras de recursos de origen nacional, a recibir, para el año 2007, observo 3.345.000 pesos y veo que el presupuesto de la provincia es equivalente a esta cifra y solamente el 10 por ciento del financiamiento se hace con recursos de la jurisdicción provincial.

Es decir, hay que contabilizar desde el punto de vista de la ejecución del gasto y de la transferencia de recursos, no solamente los aspectos de carácter nominal vinculados a lo que se obtiene de financiamiento y cómo se distribuyen, sino cómo se distribuyen los recursos en términos globales. Es decir, cómo cada una de las jurisdicciones provinciales, en términos de distribución geográfica de partidas, recibe los recursos, algunos de los cuales son automáticos, otros son de afectación específica y otros son, efectivamente, por transferencia de capital a transferencias corrientes, que tienden a incrementar la capacidad de ejecución de políticas públicas en cada uno de los estados provinciales.

Por eso me parece que amerita un análisis extremadamente objetivo desde el punto de vista de la recaudación de impuestos y cómo se distribuyen los mismos.

La segunda cuestión que quería poner en consideración es que desde el punto de vista de la distribución del impuesto al cheque, en definitiva, entendemos que las modificaciones que se hacen al proyecto de ley que estamos en condiciones de aprobar, cumple los requisitos de afectación específica. Por lo tanto, las modificaciones que se introdujeron en la Cámara de Diputados de la Nación no ameritan poner en duda una eventual inconstitucionalidad, sino muy por el contrario, los recursos son de afectación específica y permiten que el Tesoro nacional afecte claramente el mantenimiento de la sustentabilidad del programa económico.

También es importante remarcar cuál es la capacidad de financiamiento del impuesto a los créditos y débitos bancarios. El 88 por ciento de este impuesto se retiene en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En general, el 15 por ciento lo aportan las personas físicas; el 30 por ciento, un número identificado con seiscientas empresas, y el resto, obviamente, pequeñas y medianas empresas diseminadas por todo el país.

Desde el punto de vista del registro de la transacción equivalente al 17 por ciento como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, en general, el trámite se hace en forma directa y esto requiere, por supuesto, la posibilidad de un análisis minucioso que lo haremos con la

Subsecretaría de los Ingresos Públicos y las autoridades del Ministerio de Economía.

También creemos que es importante aclarar los aspectos vinculados a los deudores hipotecarios de preconvertibilidad. Nosotros consideramos que esta norma en definitiva constituye un proceso de transición para la resolución del problema de los deudores hipotecarios “preconvertibilidad”.

Y si bien aceptamos que esa transición, inexorablemente, debe resolver los problemas de tipo estructural, no es menos cierto que es necesario definir con exactitud el análisis del universo de los temas a resolver.

Si se trata, efectivamente, de 25.000 deudores hipotecarios “preconvertibilidad”, con cinco operatorias distintas, es necesario identificar la solución estructural y la auditoría técnica exigible y recomendable, a los efectos de que el nivel de afectación que pueda tener la resolución del problema para el activo del Banco Hipotecario Nacional sea compensado, no por medio de acciones como las que ya dijimos muy claramente que no estaríamos dispuestos a aceptar, ni con transferencias de un fondo fiduciario ni con resoluciones vinculadas a la emisión de un bono en donde el Estado deba subrogar las obligaciones emergentes desde el punto de vista de la modificación del balance.

Es cierto también que esta cartera “preconvertibilidad” forma parte del balance de una entidad que ha pasado por un proceso de privatización, en el que se ha registrado como un valor ponderable un activo de monto determinado y que cualquier ajuste requiere, específicamente, contemplar que esa variación cuente con una ponderación adecuada desde el punto de vista del beneficio al deudor y también de la resolución de la política pública del Estado nacional.

Con respecto a las observaciones que se han formulado relativas al universo comprendido en este esquema, obviamente son aquellas a las que se refiere el artículo 23; o sea, a la modificación al artículo 1º de este proyecto de ley, respecto a los alcances anteriores a la ley 23.928, de convertibilidad.

Con relación a las observaciones formuladas por el señor senador Martínez, en cuanto al artículo 11, el concepto de estabilidad e invaria-

bilidad del impuesto se refiere, estrictamente, a las cuestiones vinculadas a la intangibilidad de recursos afectados al fondo fiduciario como bienes fideicomitidos, y entendemos que la estabilidad e invariabilidad del impuesto no se refiere a la variación experimentada en la tasa del impuesto, a la alícuota correspondiente, sino básicamente a la invariabilidad desde el punto de vista de la conformación de los bienes fideicomitidos, con el objeto de garantizar que efectivamente se aplique al destino correspondiente.

Sr. Presidente (Pampuro). – Señor senador Capitanich: la señora senadora Escudero le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Capitanich. – Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero concretar mi propuesta de modificación.

El artículo 1º –artículo 23–, sobre unidad de reestructuración, quedaría así: “Créase la Unidad de Reestructuración...”. Y terminaría cuando se conforma la comisión, que tiene que expedirse en 90 días. Los miembros de la comisión ejercerán funciones ad honorem, dictarán su propio reglamento. El párrafo sexto es importante: al momento de expedirse, la Unidad deberá considerar el mutuo de origen, los intereses y penalidades aplicadas de cualquier naturaleza, las cláusulas de caducidad de los plazos, en anatocismo, los pagos, pagos a cuenta y toda otra modalidad de los mismos y demás circunstancias que resultaren relevantes para la determinación de la reestructuración encomendada. De ahí propongo eliminar lo que sigue y, en el párrafo doce, que empieza con la frase “Evaluados que fueran los casos...”, retomar la segunda parte y decir: “elevantá al Congreso de la Nación una propuesta definitiva que puede contemplar quitas, recálculo de cuotas o subsidios”, y continuamos.

Es decir, eliminamos esta necesidad de que se meta en cada contrato. Le estamos diciendo que tiene que realizar el estudio global y elevar al Congreso en ese plazo de 90 días una propuesta definitiva que contemple quitas, recálculo de cuota o subsidio.

Y con relación a cuál es el universo de deudores que comprende, o sea, si son todos los

“preconvertibilidad” o sólo los que están en mora, la verdad es que la norma no es lo suficientemente clara y habrá quienes la interpreten de una forma y quienes la interpreten de otra. Porque el artículo dice: “Créase la Unidad de Reestructuración que tendrá por objeto el análisis de propuestas de reestructuración”, y luego señala “...de la totalidad de los mutuos hipotecarios pactados entre adjudicatarios del ex Banco Hipotecario comprendidos en el artículo 2º”. Y ahí nos remite al artículo 2º, vinculado con los mutuos elegibles; pero es una norma para deudores en mora.

Entonces, cuando se dice que no registrá lo establecido en el artículo 3º de la presente respecto de la época de la mora, no nos dice “respecto de la mora” sino de “la época de la mora”. Pero la época de la mora era muy estrecha en la ley de reestructuración: desde el 1º de enero de 2001 al 11 de setiembre de 2003.

Como era una puerta tan angosta, se decidió dejarla más abierta. Pero, obviamente, al estar inserta la norma en otra referida al salvataje de deudores con problemas para pagar sus créditos, creo que sólo nos seguimos refiriendo a los deudores en mora preconvertibilidad.

Considero que también habría que hacer referencia a que el banco ha dado facilidades y subsidios, que muchos de los deudores están cumpliendo a una tasa subsidiada, por lo que el banco hizo algunos esfuerzos. Es decir que el universo restante podría solucionarse a través de condonaciones, especialmente el de la operatoria 311, ya que el propio Banco Hipotecario reconoce que las viviendas actualmente no tienen ningún valor, ya que fueron hechas por cooperativas y con muchos defectos de construcción; es por ello que el propio Banco reconoce que esa gente no debería pagar. Además, los adjudicatarios tienen un nivel muy bajo de ingresos y escasas posibilidades de pago.

Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Capitanich, el senador Fernández le pide una interrupción.

Sr. Capitanich. – Se la concedo, señor presidente.

Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. – Señor presidente: ayer debatimos bastante este tema, tal como lo hicimos con anterioridad la situación de los deudores privados.

Es cierto que la propuesta elaborada por la Cámara de Diputados no es una pieza jurídica.

Y no menos cierto es que tampoco podíamos nosotros, frente a deudores “preconvertibilidad” –con muchos años de antigüedad y respecto de los cuales ninguna administración resolvió absolutamente nada–, solucionar su situación mágicamente a través de una fórmula polinómica ocurrida a un genio. En realidad, cuando hablamos de pasivos –los deudores morosos– o de 25 mil deudores sobre una cartera de 120 mil, nos referimos al activo de un banco, el que en definitiva deberá analizar en qué operatoria hace el retoque y bajo qué modalidades.

No comparto la idea de que se trata de un tema que puede tratarse ligeramente; al respecto, comparto el enfoque de la senadora Negre de Alonso. No podemos abordar un segmento sino la totalidad de los casos. Si tenemos en cuenta que la operatoria 311 fue construida en diversos lugares geográficos del país a través de cooperativas de viviendas y de consumo, y con una calidad constructiva muchas veces inferior al término medio, y que estos lugares de radicación no siempre acompañaron el incremento del valor inmobiliario que se experimentó en algunos lugares del país, debemos entender –de la mano de algún fallo de algún tribunal superior de Justicia– que habrá que hacer una ponderación integral. Habrá que analizar el mutuo originario, la cantidad de veces que efectivamente se novó ese crédito, la composición de la cuota, etcétera.

Y para eso, independientemente de la suerte que haya corrido la Unidad de Reestructuración a la cual hice referencia, con esta composición –con participación y decisión del Estado nacional de llevar adelante el tema– tendrá un final distinto. Y tiene que tener un final distinto porque, efectivamente, ya hemos comenzado a resolver en parte la historia de los deudores privados, y estamos tratando de resolver un problema que, reitero, tiene muchísimos años de antigüedad y absoluta inacción por parte de todas las administraciones nacionales. Hay decisión de terminar con este tema.

Con respecto a la suspensión de las ejecuciones hipotecarias, no me parece menor que la Unidad de Reestructuración esté integrada por un representante del Ministerio de Economía, uno del Banco de la Nación y uno del Banco Hipotecario porque, con la sola integración de dicha Unidad, la decisión de suspender los remates está por demás definida.

Es cierto que además de la novedad...

—Murmillos en el recinto.

Sr. Presidente (Pampuro). — Silencio, por favor.

Sr. Fernández. — Gracias, señor presidente.

En esta nueva etapa, que tratará de tener un final distinto a la anterior, habrá que encontrar una respuesta definitiva, la cual vendrá de la mano de un trabajo que, como bien lo dijo la señora senadora Negre de Alonso, si bien es cierto que no es típicamente legislativo, deberá analizar una historia rica en desafortunadas políticas públicas sobre los sistemas de vivienda; sistemas que ha heredado tanto el Gobierno nacional como el Parlamento, que pretenderá resolverlo de una vez.

Entonces, la supresión de intereses y la participación del Banco Hipotecario no es un dato menor.

Ayer también se dijo que el Banco Hipotecario podía suspender las ejecuciones porque, en definitiva, era el que estaba llevando adelante las ejecuciones, más allá de la participación accionaria del Estado. Y claro que es así. La privatización del Banco Hipotecario, pese a que el Estado tiene mayoría, tiene una gerencia absolutamente privada y no hay ninguna posibilidad, por rara que parezca, de que la mayoría accionaria del Estado —y este es un hallazgo de una privatización votada en gobiernos anteriores— influya en el manejo del Banco.

Entonces, lo lógico es que el accionar de la Unidad de Reestructuración tenga un final distinto con la participación incluida del Banco Hipotecario.

Sé que el camino no es el ideal. Quizás hubiéramos ideado alguna salida legislativa más prolija. Sin embargo, era un muy mal mensaje porque los deudores habían conciliado con la gente del Banco Hipotecario y con legisladores de la Cámara de Diputados una herramienta

concreta, que es aquella a la que hice referencia. Y esa herramienta, independientemente de las objeciones de tipo normativo que se le han hecho, nos debe llevar a un resultado cierto, cual es el de terminar con esta película donde nadie resuelve absolutamente nada. Hasta ahora se hicieron encendidos discursos y hubo posiciones absolutamente bondadosas hacia quienes, en definitiva, son presos de la mala política del Estado, de una mala política crediticia, y hoy se encuentran en situaciones difíciles de explicar, pero nadie planteó una solución concreta.

Es cierto también que se había avanzado en otra línea, y acá debo destacar que hubo senadores y autoridades del Banco Hipotecario que empezaron a transitar un camino distinto. Pero no es menos cierto que, frente a la sanción de la Cámara de Diputados, había dos caminos.

—Murmillos en el recinto.

Sr. Fernández. — Si no hay silencio, no continúo en uso de la palabra.

Sr. Presidente (Pampuro). — Silencio, por favor, porque no se puede escuchar.

Sr. Fernández. — Me parece que ayer estuvo no sólo el compromiso con los deudores sino el mensaje claro a la Cámara de Diputados en el sentido de trabajar en sintonía y en conjunto para tratar de encontrar una solución a un problema que, como he dicho, es de vieja data.

Es cierto que se repite el escenario de la unidad anterior en cuanto al análisis de la composición del mutuo originario, pero, además, a la luz de la ley 25.561, prórrogas y aclaratorias —aludo a la Ley de Emergencia Económica—, el conjunto de normas vigentes, el tipo de tasa, si hubo usura, acumulación de intereses, anatocismo y, concretamente, llegar a lo mejor a la misma conclusión a la que arribó la Unidad de Reestructuración que funcionó con anterioridad. Pero me parece un buen camino; por lo menos, me parece un camino lógico que tiene fecha cierta y que dependerá de nosotros que no fracase. Porque, además, tenemos una fecha de corte: si después de los noventa días de funcionamiento esta comisión no tiene ningún resultado no vamos a tener otra alternativa que —ahí sí, de la mano de todos los elementos objetivos que podamos recabar— aprobar una ley que efectivamente resuelva y en forma definitiva, por operatoria y para todos, este problema.

No se puede pensar que la solución sea solamente para los deudores porque, efectivamente, si tenemos 25 mil deudores, dentro de ese número hay un grupo importante de deudores reales y otros que son deudores especulativos. Esta cuestión la tendremos que analizar en cada operatoria en particular, y cuando se resuelva habrá que hacerlo en favor de los que deben pero también en favor de los que han cumplido, por imperio constitucional, por lógica y porque, además, no existe ninguna razón para que nosotros hagamos un abordaje distinto de esta situación.

Por ello, independientemente de las bondades o no de esta iniciativa y teniendo como plataforma de lanzamiento el trabajo que hemos efectuado nosotros con los deudores privados, me parece que es un buen ensayo que tiene la noble finalidad de terminar con una vieja política de hacer discursos y efectuar fórmulas polinómicas que, en definitiva, después terminan condenando al Estado a pagar cifras multimillonarias en favor de quienes han hecho un pingüe negocio a espaldas de él.

Por ello, me parecieron importantes los conceptos y la amplitud con que se abordó este tema en la comisión. Y también destaco la posición de aquellos que, aun no compartiendo la riqueza normativa o hermenéutica de lo que estábamos sancionando, pretendieron acompañar este intento para terminar con una historia larga y de muchos desaciertos. Así que me parece que se trata no sólo de una buena norma, sino de una iniciativa que nos va a permitir en un plazo cierto llevar a los deudores hipotecarios una solución definitiva, al margen de todo tipo de especulación y sin discursos demagógicos.

Agradezco al señor senador Capitanich la interrupción que me concedió.

Sr. Presidente (Pampuro). – Que, por cierto, fue bastante larga...

Continúa en el uso de la palabra el señor senador Capitanich.

Sr. Capitanich. – Señor presidente: voy a seguir rebatiendo las observaciones –que he anotado meticulosamente– planteadas en los discursos pronunciados por los oradores preopinantes.

Una de las observaciones que hizo el señor senador Sanz tiene que ver con el costo de fi-

nanciamiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Efectivamente, respecto de este costo de financiamiento el presupuesto 2007 contempla un tope equivalente...

Sr. Sanz. – ¿Me permite una interrupción?

Sr. Capitanich. – Sí, le concedo la interrupción.

Sr. Presidente (Pampuro). – No dialoguen. Por favor, no estoy tan “dibujado”.

Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz. – Me voy a aprovechar de esta generosidad sin límite que tienen en este momento. *(Risas.)*

Quiero recordarles que yo hice mención de eso no con motivo de la discusión de este proyecto. Lo dije con relación a un proyecto que hemos presentado y que versa sobre la distribución del impuesto al cheque, en cuya segunda parte, también haciendo referencia a las malas distribuciones entre la Nación y las provincias, mencionamos esto. Pero no tiene nada que ver con este proyecto.

Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Capitanich.

Sr. Capitanich. – Señor presidente: era pertinente la observación por parte del señor senador Sanz.

Sr. Presidente (Pampuro). – Me parece muy bien. Continúe, por favor.

Sr. Capitanich. – De cualquier manera, consideramos que es importante remarcar que el proyecto de presupuesto de 2007, que vamos a tratar en este recinto, contempla un límite equivalente a 1,9 por ciento del tope del financiamiento, porque en general, la Administración Federal de Ingresos Públicos, como tiene la función de la registración de la recaudación del sistema de seguridad social y, paralelamente, de la Administración General de Aduanas y de la Dirección General Impositiva en cuanto a los recursos de carácter tributario, tiene un total de 19.000 agentes, que se financian con un presupuesto equivalente a 2.000 millones de pesos para el balance aprobado en 2005.

Pero inexorablemente, el tema central aquí es la discusión respecto de cómo se distribuye el costo de financiamiento del ente recaudador con relación a la Nación o a la provincia. Es un

tema que no ha sido debatido en oportunidad de la conformación del decreto correspondiente.

En cuanto al impuesto al cheque, consideramos que, efectivamente, el sistema de pago a cuenta que se instrumenta es equivalente a 17 por ciento sobre el monto nominal de la percepción. Es necesario cuantificar debidamente el monto total retenido, cómo se paga a cuenta y cómo se consolida desde el punto de vista de la distribución.

Obviamente, sería mucho más fácil si el pago a cuenta funcionara de manera universal con un criterio específico de distribución. El problema central es que nuestro sistema de distribución de recursos de origen nacional ha tenido múltiples variaciones, desde la ley 23.548 a la fecha. Por lo tanto, existe afectación específica de cada uno de los tributos en particular y eso, obviamente, tiene un impacto que desnaturaliza al momento de tomar los pagos a cuenta, desde la asignación de cada uno de los recursos.

Creo que técnica y materialmente es muy difícil consolidar apropiadamente la base de datos en cuanto al nomenclador de descuento para cada una de las operaciones sobre la base del tributo a cuenta, porque en realidad, hay que tomar la base de datos del impuesto a los débitos y créditos bancarios desde el punto de vista de cómo se imputa a cada empresa y hay que tomar todas las declaraciones juradas. Por eso, es objetivamente difícil establecer una base de cálculo adecuada respecto del pago a cuenta.

No obstante ello, nos parece que hace a la transparencia de las relaciones financieras intergubernamentales entre Nación y provincias y es por eso que nosotros deberíamos considerar adecuadamente esta situación.

Por otro lado, el senador Basualdo hizo un análisis vinculado con el tema del ajuste por inflación. Desde 2002 a la fecha, hemos tenido un incremento de la recaudación del impuesto a las ganancias, que pasó de 8.700 millones de pesos a casi 34.000 millones en el ejercicio 2006, según lo previsto y, obviamente, una cifra superior a los 37.000 millones para 2007.

El ajuste por inflación se discute claramente, pero hay que correlacionarlo de un modo adecuado respecto de los quebrantos impositivos y de la percepción de recursos para el sosteni-

miento de las tareas macroeconómicas en la Argentina.

En cuanto al análisis de quebrantos impositivos, la ley 25.561 estipulaba claramente un *stock* acumulado de quebrantos equivalente a 125.000 millones de pesos, y eso se utiliza para los cinco ejercicios posteriores, atento a que la República Argentina tiene simplemente la consideración de cinco años en términos de período fiscal para la contabilización de los quebrantos.

Entonces, por un lado, el registro de los quebrantos para el impuesto a las ganancias implica una reducción de la percepción de impuesto a las ganancias. Un mecanismo de compensación por la pérdida de ingresos en materia de impuestos a las ganancias era, precisamente, la posibilidad de que cuando disminuyera el período de utilización de quebrantos se pudiera ponderar adecuadamente el tema del ajuste por inflación.

Se ha analizado con absoluto detalle cada uno de los puntos que oportunamente se plantearon.

Creo que acá hay una cuestión importante: el impuesto a las ganancias para las personas físicas ha aumentado considerablemente de 2002 a la fecha. Esto resulta muy importante, ya que es equivalente a más de 1 por ciento en términos de producto interno bruto: es decir, acá hemos tenido un incremento de dos puntos del producto interno bruto en materia de recaudación de impuesto a las ganancias y las personas físicas realizaron una contribución importante. Por supuesto que el mayor nivel de formalización implica la capacidad efectiva desde el punto de vista de la contribución de las personas físicas en el total del impuesto a las ganancias.

Por eso, señor presidente, considero importantes todas las reformas que nosotros hemos tratado aquí: la prórroga de impuestos, que implica una capacidad de financiamiento para la ejecución de las políticas públicas; también la reforma del artículo 23 de la ley 25.798; y la posibilidad de utilizar otro tipo de recursos. ¿Por qué? Porque no sólo hemos considerado aquella prórroga de impuestos que genera una fuente de financiamiento equivalente a casi 15 mil millones de pesos, sino que también estamos promoviendo algo que beneficia a trabajadores de la industria petrolera, con el objeto de garan-

tizar no sólo la solución de conflictos, sino también una mayor equidad distributiva. A su vez, el Poder Ejecutivo, utilizando las graduaciones vinculadas con el mínimo no imponible, afecta el funcionamiento con el objeto de mejorar la percepción de estos ingresos.

Entonces, creo que es importante remarcar que todas las leyes que estamos trabajando hoy tienen por objetivo preservar sistemáticamente la estabilidad macroeconómica. A su vez, esa estabilidad macroeconómica tiene por objetivo garantizar un incremento sistemático del producto interno bruto, de la tasa de inversión, en la generación del empleo formal y, fundamentalmente, de las condiciones que hacen al sostén de un programa económico con equidad social y distributiva.

Considero que es muy importante remarcar estas cuestiones, porque nosotros hoy estamos debatiendo y fundamentalmente realizando un análisis pormenorizado respecto del inciso 3 del artículo 75, desde el punto de vista de la afectación específica.

En esta materia de la afectación específica, estamos relacionados con dos artículos: primero, con el impuesto a los combustibles para la afectación al Fondo Fiduciario Hídrico y, por otro lado, respecto de cómo se distribuye el impuesto a los créditos y débitos bancarios.

Creo que el gran modelo de financiamiento del Estado debería converger hacia procesos sistemáticos de funcionamiento. Nosotros consideramos que la política tributaria va a poder tener capacidad de corregir las distorsiones en tanto y en cuanto estemos en condiciones de sustituir las fuentes de financiamiento.

Es poner en peligro la estabilidad macroeconómica pretender alterar los patrones de distribución de los recursos con afectación específica. El diseño, la ejecución, la consolidación y las políticas públicas nos van a permitir claramente resolver los problemas de asimetría tanto en la distribución funcional como espacial del ingreso.

La República Argentina ha tenido una marcada recuperación en su estructura de ingresos. Antes, teníamos una distribución funcional del ingreso, entre trabajadores y empresarios, equivalente al 26 o 28 por ciento, en el peor momento de la crisis. En la actualidad, se ha

incrementado al 36 o 38 por ciento. Más de 500 convenciones colectivas de trabajo han permitido mejorar las condiciones salariales de negociación. Así, la participación de los trabajadores también mejora la distribución funcional del ingreso. Entonces, creemos objetivamente que para preservar las condiciones esenciales de estabilidad macroeconómica es necesario establecer que esta prórroga de impuestos, con estos parámetros y estos patrones de distribución y con esta capacidad de comportamiento va a permitir inexorablemente avanzar en el logro y en los resultados del desarrollo de las políticas públicas.

Nosotros creemos que hemos avanzado muy profusamente en la explicación, por lo que estaríamos en condiciones de trabajar ya el voto correspondiente en los distintos aspectos.

Por lo tanto, propongo el siguiente mecanismo de votación: en primer lugar, votar la prórroga de las leyes en materia de reparación de derechos humanos, dado que hay consenso pleno por parte de todos los miembros de este cuerpo. En segundo lugar, propongo votar la modificación del artículo 23 de la ley 25.798, porque tiene un amplio consenso en este recinto. También propongo la votación en general de los otros proyectos que tienen consenso.

Por último, pediría el tratamiento en general al final y después en particular del proyecto que hace la conversión de la tasa hídrica en impuesto y del proyecto que tiene que ver con la distribución del impuesto al cheque. Ambos exigen la mayoría especial de 37 votos según el artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional.

Dicho esto, y con las argumentaciones correspondientes de parte de nuestro bloque, sometemos a consideración los distintos proyectos que hemos tratado en general.

Sr Presidente (Pampuro). – Vamos a someter a votación los proyectos.

Sr. Secretario (Estrada). – El primer proyecto a votar es el expediente C.D.-132/06.

Sr. Capitanich. – Propongo, en primer lugar, votar el expediente C.D.-133/06, de la Convención Colectiva de Trabajo N° 396; después, el tema de derechos humanos, ya que hay consenso generalizado, y luego la prórroga de las leyes 24.043 y 24.441.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: los proyectos sobre Ley del Cheque y recursos hídricos los dejamos para el final. Son los dos proyectos que requieren 37 votos.

Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, en primer término, vamos a votar el expediente C.D.-133/06, que excluye los conceptos comprendidos en los artículos 39, 60, 80 y 81 de la Convención Colectiva de Trabajo N° 396, explotación petrolera, de la base imponible a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias de los trabajadores amparados por dichos acuerdos en las convenciones.

Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general y en particular, en una sola votación.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 57 votos afirmativos, un voto negativo y ninguna abstención.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 2.¹

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.² Se harán las comunicaciones correspondientes.

Corresponde votar ahora el expediente C.D.-129/06, por el que se modifica la ley 25.798, de regímenes de refinanciación hipotecaria, sobre creación de una unidad de reestructuración, de mutuos hipotecarios, “preconvertibilidad”.

Aquí había una propuesta de modificación...

Sr. Capitanich. – Se votará sin modificaciones.

Sr. Presidente (Pampuro). – La senadora Escudero había propuesto una modificación.

Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. – Simplemente, para expresar el sentido de mi voto.

Votaré afirmativamente en general; y en particular, dejo constancia de mi voto negativo a

los párrafos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del artículo 23, que consigna el artículo 1°.

Sr. Presidente (Pampuro). – Se dejará constancia en el Diario de Sesiones.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 58 votos por la afirmativa. (*Aplausos en las galerías*). Unanimidad en general, con la reserva de la senadora Escudero en la votación en particular.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 3.³

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.⁴

A continuación, el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se proroga por el plazo de dos años la fecha de vencimiento de la ley 25.985, para acogerse a los beneficios contemplados por las leyes 24.043 y 24.411, de indemnización para las víctimas de delitos de lesa humanidad (C.D.-112/06).

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 56 votos por la afirmativa, 2 votos por la negativa y ninguna abstención.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 4.⁵

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.⁶

A continuación, el expediente S.-2.568/05, relacionado con la modificación del artículo 9° bis de la Ley de Lealtad Comercial, también llamada “Ley del Redondeo”, que vino con modificaciones de la Cámara de Diputados.

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

³ Ver el Apéndice.

⁴ Ver el Apéndice.

⁵ Ver el Apéndice.

⁶ Ver el Apéndice.

Se deja constancia de que se aceptan dichas modificaciones.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 58 votos por la afirmativa. Unanimidad.

—El resultado de la votación surge del Acta N° 5.¹

Sr. Presidente (Pampuro). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.²

A continuación, corresponde la votación del dictamen en el proyecto de ley por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2007 la suspensión de la exención establecida en el artículo 20, inciso 1, de la Ley de Impuesto a las Ganancias (C.D.-132/06).

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 56 votos por la afirmativa y 1 negativo.

—El resultado de la votación surge del Acta N° 6.³

Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobado en general.

En consideración el artículo 1°.

Sr. Capitanich. — Señor presidente: ¿la mecánica de este proyecto de ley que tiene que ver con la prórroga de impuestos, es votar por artículo?

Sr. Presidente (Pampuro). — Sí, señor senador. Se va a votar.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 56 votos por la afirmativa, 1 voto por la negativa. La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.

—El resultado de la votación surge del Acta N° 7.⁴

Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración el artículo 2°.

Se va a votar.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 39 votos por la afirmativa, 18 votos por la negativa y ninguna abstención. La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.

—El resultado de la votación surge del Acta N° 8.⁵

Sr. Pichetto. — Señor presidente: que se clarifique bien cuál es el artículo para el cual se necesitan 37 votos para su aprobación. Que se lea por Secretaría.

Sr. Presidente (Pampuro). — Son los artículos 5° y 6°.

En consideración el artículo 3°.

Se va a votar.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 56 votos por la afirmativa, 1 voto por la negativa. La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.

—El resultado de la votación surge del Acta N° 9.⁶

Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración el artículo 4°.

Se va a votar.

—Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 56 votos por la afirmativa, 1 voto por la negativa. La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.

—El resultado de la votación surge del Acta N° 10.⁷

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

³ Ver el Apéndice.

⁴ Ver el Apéndice.

⁵ Ver el Apéndice.

⁶ Ver el Apéndice.

⁷ Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el artículo 5°. Aquí sí se necesitan los 37 votos para su aprobación.

Se va a votar.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 55 votos por la afirmativa, 2 votos por la negativa y ninguna abstención. La votación resulta afirmativa. Se ha superado la mayoría prevista en el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 11.¹

Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar el artículo 6°, para cuya aprobación también se requieren 37 votos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39 votos afirmativos, 18 negativos y ninguna abstención. Aquí también se ha superado la mayoría prevista en el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 12.²

Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar el artículo 7°, para el cual se requiere mayoría simple.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 56 votos afirmativos, uno negativo y ninguna abstención.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 13.³

Sr. Presidente (Pampuro). – La votación resulta afirmativa.

–El artículo 8° es de forma.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.⁴

Sr. Secretario (Estrada). – Se hace constar que, en general y en particular, los artículos que así lo requerían, han superado la mayoría prevista por el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde a continuación votar el expediente 136/06, por el que se establece el Fondo Hídrico de Infraestructura Específica al Desarrollo de Proyectos Hídricos en todo el Territorio nacional.

Se va a votar en general y en particular, en una sola votación. Se requieren 37 votos afirmativos.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 39 votos afirmativos, 18 negativos, ninguna abstención. Es decir, se ha superado la mayoría prevista en el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 14.⁵

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.⁶

12

O.D. 1.146: MODIFICACIÓN DE LA LEY 24.464, DE SISTEMA FEDERAL DE LA VIVIENDA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 24.464, de sistema federal de la vivienda, respecto de la selección de adjudicatarios. (Orden del Día N° 1.146.)

En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar...

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

³ Ver el Apéndice.

⁴ Ver el Apéndice.

⁵ Ver el Apéndice.

⁶ Ver el Apéndice.

(C.D.-133/06)

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2006.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º—Los conceptos comprendidos en los artículos 34, 39, 60, 80 y 81 de la convención colectiva de trabajo (CCT) 396/04, homologada por resolución de la Subsecretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 90 del 15 de diciembre de 2004 y en el acta acuerdo de fecha 10 de marzo de 2005, homologada por resolución de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 78 del 1º de abril de 2005 y en el acta acuerdo de fecha 15 de junio de 2006, homologada por resolución de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 474 del 4 de agosto de 2006, así como también en toda otra norma convencional, vinculada con la explotación petrolera, que contenga los conceptos comprendidos en los artículos mencionados precedentemente, no integrarán la base imponible a los efectos de la determinación de impuesto a las ganancias de los trabajadores amparados por dichos acuerdos convencionales.

La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción, dictará las normas necesarias a los efectos de la instrumentación de lo establecido precedentemente.

Las disposiciones del presente artículo serán de aplicación a partir del ejercicio fiscal 2006.

Art. 2º—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

ALBERTO E. BALESTRINI.

Enrique Hidalgo.

—A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(C.D.-134/06)

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2006.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,...

REASIGNACION DE UNA PARTIDA
PRESUPUESTARIA PARA EL INMEDIATO
DRAGADO DEL PUERTO DE MAR DEL PLATA

Artículo 1º — Declárase en emergencia el funcionamiento del puerto de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, por falta de dragado en las vías navegables de acceso al mismo.

Art. 2º — El señor jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las facultades conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, dispondrá la asignación de una partida presupuestaria del ejercicio correspondiente a la entrada en vigencia de la presente ley, con el objeto de ser destinada a las obras de dragado del puerto de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires.

Art. 3º — El Poder Ejecutivo nacional deberá efectuar, a través de los organismos correspondientes, los estudios técnicos y los trámites administrativos pertinentes, a los efectos de aperturar las obras de dragado en un plazo no mayor a los treinta (30) días, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 4º — La presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

ALBERTO E. BALESTRINI.

Enrique Hidalgo.

—A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Votación Nominal

124° Período Legislativo - Ordinario - 26° Sesión

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN EXCLUYENDO LOS CONCEPTOS COMPRENDIDOS EN LOS ARTS.39, 60, 80 Y 81 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO N° 396/04 (EXPLOTACIÓN PETROLERA) DE LA BASE IMPONIBLE, A LOS EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE LOS TRABAJADORES AMPARADOS POR DICHOS ACUERDOS CONVENCIONALES.

CD-133/06

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: sobre tablas

Acta N°: 2	Fecha: 29-11-06	Hora: 19:20:21
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: PAMPURO, José Juan Bautista	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	58	Votos afirmativos:	57
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	1
Total Presentes:	58	Abstenciones:	-
Ausentes:	14		
Votos Afirmativos Necesarios:	30	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA

Votación Nominal

124º Período Legislativo - Ordinario - 26º Sesión

PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN EXCLUYENDO LOS CONCEPTOS COMPRENDIDOS EN LOS ARTS.39, 60, 80 Y 81 DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO N° 396/04 (EXPLOTACIÓN PETROLERA) DE LA BASE IMPONIBLE, A LOS EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE LOS TRABAJADORES AMPARADOS POR DICHOS ACUERDOS CONVENCIONALES.

CD-133/06

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: sobre tablas

Acta N°: 2

Fecha: 29-11-06

Hora: 19:20:21

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente:

PAMPURO, José Juan Bautista

Desempeate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
BAR, Graciela	AFIRMATIVO	MARIN, Rubén Hugo	AFIRMATIVO
BASUALDO, Roberto Gustavo	AFIRMATIVO	MARINO, Juan Carlos	AFIRMATIVO
BORTOLOZZI, Adriana Raquel	AFIRMATIVO	MARTINEZ, Alfredo Anselmo	AFIRMATIVO
BUSSI, Ricardo Argentino	AFIRMATIVO	MASSONI, Norberto	AUSENTE
CAPARROS, Mabel Luisa	AUSENTE	MASTANDREA, Alicia Ester	AFIRMATIVO
CAPITANICH, Jorge Milton	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
CAPOS, Liliana Delia	AFIRMATIVO	MAZA, Ada	AUSENTE
CASTILLO, Oscar Aníbal	AFIRMATIVO	MENEM, Carlos Saúl	AUSENTE
CASTRO, María Elisa	AFIRMATIVO	MERA Mario Ruben	AFIRMATIVO
CLOSS, Maurice Fabián	AFIRMATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Ruben	AFIRMATIVO
CURLETTI, Miriam Belén	AFIRMATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	AUSENTE
DANIELE, Mario Domingo	AFIRMATIVO	PAMPURO, José Juan Bautista	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	AFIRMATIVO	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
FALCO, Luis Alberto	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	AFIRMATIVO
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina	AFIRMATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	AFIRMATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	QUINTELA, Teresita Nicolasa	AUSENTE
GALLIA, Sergio Adrián	AUSENTE	REUTEMANN, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GIOJA, César Ambrosio	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AUSENTE
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	AFIRMATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	AUSENTE	ROSSI, Carlos Alberto	AFIRMATIVO
GOMEZ DIEZ, Ricardo	AFIRMATIVO	SAADI, Ramón Eduardo	AFIRMATIVO
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.	NEGATIVO	SALVATORI, Pedro	AUSENTE
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SANCHEZ, María Dora	AFIRMATIVO
IBARRA, Vilma Lidia	AUSENTE	SANZ, Ernesto Ricardo	AFIRMATIVO
ISIDORI, Amanda Mercedes	AFIRMATIVO	SAPAG, Luz María	AFIRMATIVO
JAQUE, Celso Alejandro	AFIRMATIVO	TAFFAREL, Ricardo Cesar	AFIRMATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	TERRAGNO, Rodolfo	AFIRMATIVO
KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia	AUSENTE	URQUIA, Roberto Daniel	AFIRMATIVO
LATORRE, Roxana Itatí	AFIRMATIVO	VIANA, Luis Alberto	AUSENTE
LEGUIZAMON, María Laura	AFIRMATIVO	VIGO, Elida María	AFIRMATIVO
LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo	AFIRMATIVO	VIUDES, Isabel Josefa	AFIRMATIVO
M. PASS de CRESTO, Laura	AFIRMATIVO	ZAVALIA, José Luis	AUSENTE

III

INSERCIONES

1

Solicitada por el señor senador López Arias
Tema: Convención Colectiva de Trabajo
de Explotación Petrolera

Señor presidente:

El proyecto venido en revisión que excluye determinados conceptos contenidos en la Convención Colectiva de Trabajo 396/04 (explotación petrolera), de la base imponible, a los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias de los trabajadores amparados por estos acuerdos convencionales.

Este proyecto tiene aspectos de debate sobre los que es preciso detenerse, sin perjuicio del voto afirmativo que desde ya adelanto fundado en que un beneficio a los trabajadores siempre será apoyado, y se trata de un avance en una discusión que debe continuar para extender este beneficio a otros sectores y considerarse todos los conceptos no remunerativos.

El proyecto abre la discusión respecto del debate sobre si corresponde o no considerar como base imponible para la determinación del impuesto a las ganancias los conceptos no remunerativos del salario, puesto que la naturaleza jurídica del tributo es la renta y esos conceptos no la integran.

Sin perjuicio de ello, debo resaltar que existen múltiples actividades donde los trabajadores tienen conceptos no remunerativos –básicamente viáticos y traslado– que son tomados como base imponible del impuesto a las ganancias en sus respectivos convenios o al momento de la liquidación. Así lo adelanté en oportunidad de tratarse este proyecto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde he recibido particular inquietud de los trabajadores de la AFIP.

En ese aspecto, el presente proyecto en revisión no es extensivo a otras actividades no alcanzadas por el convenio, debiéndose subsanar este hecho respecto de todas las actividades a fin de evitar ulteriores reclamos.

Entiendo asimismo que esta medida prácticamente no tiene impacto en la recaudación y, por tal, corresponde considerarlo.

Marcelo E. López Arias.

2

Solicitada por el señor senador López Arias
Tema: creación del Fondo Hídrico
de Infraestructura Específica (C.D.-136/06)

Señor presidente:

Quiero adelantar mi voto afirmativo respecto del proyecto venido en revisión que convierte la, hasta hoy, denominada tasa hídrica, creada por el decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.381/01, en impuesto.

Este proyecto no modifica en nada la estructura de la imposición y subsana una denominación técnicamente insostenible.

Sin embargo, creo conveniente dejar aclarado dos aspectos respecto de la cuestión en tratamiento.

En primer lugar, una aclaración respecto del esquema de consulta con el CIMOP que se viene realizando para la definición de determinadas obras que son importantes para las jurisdicciones, y que su participación resguarda el espíritu federal en estas decisiones.

Entiendo que en esta consulta con el CIMOP también debe mantenerse el espíritu federal respecto de la asignación de los montos recaudados por el fondo específico que se crea. Se garantiza así que un tributo sobre un insumo que pagan todos los consumidores tenga una asignación equitativa y federal, aun cuando la problemática hídrica está principalmente relacionada con determinadas regiones.

La segunda aclaración se refiere a la necesidad de redefinir vía reglamentación la prioridad respecto del destino del fondo específico que se crea. Ello porque a diferencia de la redacción del antecedente normativo (decreto 1.381/01), se incluyen como destino los servicios, mantenimiento de infraestructura hídrica, lo que amplía el destino. Por lo tanto, el tributo debe tener un destino más definido y relacionado con obras de infraestructura, más que con servicios conexos a las cuestiones hídricas.

Marcelo E. López Arias.

3

Solicitada por el señor senador López Arias
Tema: prórroga de suspensión de exención
del impuesto a las ganancias (C.D.-132/06)

Señor presidente:

Me voy a referir en primer término al título I respecto de la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2007 de la exención establecida en el artículo 20, inciso 1) de la ley del impuesto a las ganancias. Deseo dejar constancia de que no comparto prorrogar una vez más la suspensión de la exención establecida en el artículo 20, inciso 1) de la ley del impuesto a las ganancias, porque entiendo que los reintegros y reembolsos a las exportaciones no deben considerarse dentro de la materia gravada por el mencionado tributo y aumentan innecesariamente la carga fiscal que incide sobre las economías regionales cuya producción se destina al mercado externo.

Respecto del título II “Prórroga del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias”, establecido por la ley 25.413 y restante normativa que determinó el régimen de destino de esa recaudación, nos pone sobre el debate respecto del destino de la misma.

Las sucesivas prórrogas han transformado a este tributo en parcialmente coparticipable, pero entiendo que este régimen transitorio de destino del impuesto, debiera irse normalizando teniendo en cuenta la situación económico-financiera, y coparticiparse en su totalidad, lo que restituiría el estatus que tienen las provincias frente a la coparticipación de este impuesto de acuerdo con lo establecido por la ley 23.548 y a su vez, simplificaría la distribución del mismo.

Respecto de la prórroga del impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos, establecido por la ley 24.625, adelanto mi voto favorable.

En un primer momento, firmé el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en disidencia parcial, puesto que no existía un compromiso del gobierno nacional de respetar durante 2007 la aplicación de la alícuota del 7%.

Este compromiso fue posteriormente exteriorizado a través de una nota remitida por el Lic. Mario Presa, en su calidad de secretario de ingresos públicos.

En la mencionada nota, el señor subsecretario nos informa que se tramita bajo el número de proyecto -S01:0013016/2006 un proyecto de decreto por el cual el Poder Ejecutivo nacional, haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 9º de la ley 25.239, establece en 7% la alícuota del tributo en cuestión, para el período 2007.

Mi posición es reiteratoria de mis anteriores intervenciones y está fundamentada en la protección al Fondo Nacional del Tabaco, puesto que el mismo cumple un rol esencial en materia redistributiva dentro de la actividad.

Marcelo E. López Arias

4

**Inserción solicitada por la señora senadora Gallego.
Tema: creación de centros de desarrollo infantil
(O.D.-1.203/S.-1.970/06)**

Señor presidente, señores senadores:

El presente proyecto promueve y regula los centros de desarrollo infantil o denominaciones similares, que apuntan al desarrollo integral de niñas y niños hasta los 4 años de edad. A dichos centros se los concibe como espacios proclives para la ayuda complementaria a la familia, en el desarrollo integral de sus hijos, ya que éste no es sólo un compromiso de sus padres, sino también del Estado.

Se cumplieron 47 años de la Declaración de los Derechos del Niño; en 1989 fue aprobada la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y por la ley 23.849 el Parlamento argentino sanciona, en 1990, la aprobación a dicha convención. En 1994, adquiere rango constitucional, con todo lo que ello implica. Por su parte las mayorías de las provincias tienen legislación al respecto; el año pasado este Congreso sancionó la ley 26.061 de protección integral para la Infancia, sin

embargo, debemos reconocer cuánta deuda tenemos con la niñez argentina.

Toda esa legislación nos habla claramente del derecho a desarrollar al máximo las posibilidades de los chicos, y esto es un compromiso asumido por el Estado. Se ha determinado con toda claridad, que las niñas y niños son sujetos de derecho, así lo ha entendido este Senado, al aprobar las normas jurídicas a que hacíamos referencia, pero los textos legales por sí solos no bastan. A las decisiones políticas hay que hacerlas operativas, hay que definir concretamente “cuándo” y “cómo” deberemos actuar los adultos y ya no me refiero sólo al Estado, que por supuesto lo incluyo, sino que me refiero también a la familia y a la comunidad toda.

El concepto de desarrollo infantil no se circunscribe al crecimiento, ya que éste tiene que ver con el aumento de la masa corporal y el desarrollo es un proceso de maduración progresiva, de estructuras y funciones asociadas con el cambio de tamaño. Claro que no son independientes. Es la etapa más importante para el desarrollo psicosocial y cognitivo, que estimulados en las primeras etapas desde lo afectivo, psicológico y social, harán posible que puedan crecer con todas las potencialidades genéticas con las que la naturaleza los ha dotado, por eso las políticas públicas en esta etapa de la vida son trascendentes.

Las declaraciones de los derechos por sí solas no bastan para que éstos se operativicen. Es necesario crear desde los espacios locales, lugares de resguardo para la infancia, que sirvan de acompañamiento a la familia en la nutrición, salud y desarrollo de los chicos, donde las alertas tempranas se traduzcan rápida y eficazmente en la estimulación apropiada. En los fundamentos del proyecto las autoras dicen con claridad que a estos centros no se los debe ver como sujetos de cuidado, sino como sujetos de derecho.

En párrafos anteriores hablábamos de la familia, hacíamos eje en el hogar, y ello es así por entender que el niño debe ser considerado siempre como una persona que es parte de una familia y depende de las interacciones con “otro” para crecer y desarrollar sus potencialidades biológicas, psicológicas y sociales.

Por ello, la familia debe cumplir en ese desarrollo un rol fundamental, es que se trata de la institución socializadora por excelencia, que debe transmitir valores y actitudes, apoyar el desarrollo de aptitudes, en definitiva su apoyo es insustituible para el crecimiento y desarrollo de los pequeños.

Por eso se exige la complementariedad interinstitucional de la familia y de la comunidad toda en la que se encuentra obviamente incluido el Estado. Habrá que tomar muchos recaudos para lograr el éxito esperado, para ello el proyecto plantea tener en cuenta la realidad y nos habla de dos niveles de complejidad: a) los que cuentan en su ámbito físico con todos los servicios y b) los que deben apelar a la articulación para su cumplimiento.